



Programa de Ciencia Política
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

De la arena internacional al conflicto doméstico: un análisis de las negociaciones del estado colombiano con el M-19 en el marco de los acuerdos de Corinto (1984)

Manuela Contreras
Proyecto de grado

Tutor:
Juan José Fernández

Diciembre de 2021

Tabla de Contenido

Introducción	1
Contexto Histórico.....	3
Marco Teórico	12
Acuerdos y negociaciones de paz:	12
Negociaciones de paz en Colombia:.....	15
Acercamiento teórico a las negociaciones políticas en el marco de la teoría de las relaciones internacionales:.....	17
Aproximación teórica a las negociaciones políticas en el marco de los conflictos intraestatales:.....	20
Asimetrías de información:	20
Problemas de compromiso:	22
Análisis de resultados.....	24
Problemas de compromiso:	25
Asimetrías de información:	34
Problemas de compromiso y asimetrías de información:	42
Conclusión:	43
Bibliografía:	45

Resumen

En 1984 la administración del expresidente Belisario Betancur lideró los primeros procesos de negociación con los grupos insurgentes que operaban en el territorio nacional: las FARC, el EPL y el M-19. A pesar de la disposición de los actores de concretar espacios de diálogo en la búsqueda de una salida pacífica y consensuada del conflicto, finalmente las negociaciones no lograron consolidarse y los líderes de los grupos insurgentes tomaron la decisión de retomar la lucha armada. El presente artículo se propone analizar la negociación entre el M-19 y el gobierno de Betancur en 1984 a través de dos conceptos empleados en la teoría de relaciones internacionales: problemas de compromiso y asimetrías de información. Los resultados del análisis de información permiten afirmar que en comparación a las asimetrías de información, hubo una mayor incidencia de los problemas de compromiso en el rompimiento de los acuerdos de Corinto.

Introducción

Esta investigación analiza el proceso de negociación entre el gobierno de Belisario Betancur y el grupo insurgente M-19 llevado a cabo en agosto de 1984 en Corinto, Cauca. Dicho proceso se analizará través de dos conceptos empleados en los estudios sobre política exterior abordados ampliamente por la academia a partir de los procesos violentos del siglo XX: problemas de compromiso y asimetrías de información entre las partes negociadoras. Para este caso, se entenderá problemas de compromiso como la falta de confianza de los actores en disputa sobre una efectiva voluntad de su contraparte para implementar un acuerdo de paz si las circunstancias llegaran a cambiar (Kirschner, 2010) Por su parte, las asimetrías de información surgen porque los actores no tienen certeza sobre algunos aspectos de su contraparte que son de gran importancia para este tipo de procesos como la capacidad armamentística y voluntad de negociación, pues por lo general los actores que se vinculan a este tipo de acuerdos tienen información privada que prefieren que su contraparte no conozca completamente ya que en un futuro puede ser de gran utilidad para sí mismo, como por ejemplo su estrategia militar (Walter, 2009). Vale la pena mencionar que por lo general la teoría que emplea estos conceptos tiende a hacerlo de manera individual y no correlacional, es decir, se analizan los efectos de las asimetrías de información y problemas de compromiso de manera independiente sobre una negociación en particular. Para efectos del presente análisis de caso, se emplean y abordan ambos conceptos de manera paralela, dejando en claro que cada uno de los problemas

mencionados incidió individualmente en el proceso de negociación que se aborda en el presente análisis.

Este estudio de caso es significativo debido a que el acuerdo de paz de Belisario Betancur con el M-19 fue uno de los primeros intentos de negociación entre un gobierno nacional y la insurgencia en la historia de Colombia (Forero, 2018). Además de su importancia histórica para los procesos de paz contemporáneos en el país, no existe mucho material académico sobre este intento de negociación, o los pocos textos existentes son de carácter descriptivo y no analítico. Por lo cual, un análisis de este proceso a partir de ambos conceptos ofrece una perspectiva original y crítica sobre los factores que incidieron en la culminación de este intento de negociación. En ese sentido, este trabajo busca contribuir al entendimiento de las negociaciones y acuerdos de paz colombianos, y sus respectivas falencias a través del uso y el análisis de dos conceptos que han sido importantes para la academia para comprender las fallas en los procesos de negociación en otros contextos.

Hechas las consideraciones anteriores, la pregunta que guía esta tesis es ¿Cuáles fueron los factores que afectaron el proceso de negociación entre el M-19 y el gobierno de Belisario Betancur en 1984? A partir de la revisión bibliográfica enfocada en los dos conceptos mencionados anteriormente, la hipótesis de este trabajo sugiere que los factores que incidieron en el rompimiento de los acuerdos de Corinto entre el M-19 y el gobierno de Betancur fueron: la falta de garantías de seguridad de los miembros del M-19 por parte de la administración Betancur durante el proceso de desmovilización y la asimetría de información que surge entre ambos actores producto de la exageración en prensa respecto a la capacidad armamentista del M-19. De este modo, este trabajo de investigación propone que los acuerdos de Corinto se vieron afectados por problemas tanto de compromiso como de asimetrías de información significativos. Sin embargo, se considera que entre ambos, el que tuvo una mayor incidencia en el rompimiento de los acuerdos fue el problema de compromiso, pues altos niveles de desconfianza durante la negociación respecto al cumplimiento de los términos del acuerdo, sobre todo en materia de seguridad, generaron un efecto negativo significativo en la voluntad del grupo insurgente para continuar en este tipo de acuerdos de paz que normalmente los ponen en situación de desventaja contra su oponente, lo que terminó en un retorno de la insurgencia a la lucha armada.

Este trabajo de investigación está conformado por cuatro apartados. Primero, un recuento histórico que permita dar cuenta del panorama sociopolítico en el que se situaron los acuerdos de Corinto y cuáles eran las tensiones existentes entre el M-19 y el gobierno de Belisario Betancur. Segundo, una contextualización teórica sobre los estudios académicos

nacionales sobre los procesos de negociación en Colombia, las bases y discusiones teóricas en torno a ambos conceptos tanto en la teoría de relaciones internacionales como en la teoría sobre guerras civiles y la pertinencia del análisis de ambos problemas para la academia nacional. Tercero, una descripción de la metodología seleccionada y análisis de los datos obtenidos a través de las herramientas de recolección de información a partir de los dos conceptos guía. Finalmente, las conclusiones y consideraciones finales.

1. Contexto Histórico

En Colombia, la interacción de múltiples actores -guerrillas de izquierda, narcotraficantes, paramilitares de derecha, gobierno nacional, Ejército Nacional y población civil- ha generado, entre otras cosas, episodios de violencia que se han prolongado durante más de 50 años. Sin embargo, dar cuenta del momento preciso en el que se originó el punto de inflexión que dio inicio al fenómeno de la violencia en Colombia es sumamente complejo, Yaffe (2011) afirma que no existe un consenso absoluto sobre el inicio y las causas del conflicto armado colombiano, ya que existen múltiples explicaciones. Así,

Algunos autores hacen énfasis en los factores socioeconómicos; otros a elementos de inclusión política a partir de la época de La Violencia; otros dan cuenta de aspectos como carencias o resentimientos, o aspectos geográficos como la naturaleza y el distanciamiento a los centros de producción (p. 192)

En ese sentido, es importante mencionar que la multiplicidad de explicaciones e hipótesis respecto a los orígenes y las causas del conflicto armado es producto de la gran diversidad de grupos insurgentes que operan en el territorio, cada uno con matices ideológicos y objetivos particulares. De los distintos grupos insurgentes que han surgido en Colombia a lo largo de las décadas, los más destacados han sido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, el Movimiento 19 de abril -M-19-, y el Ejército Popular de Liberación -EPL-. Para efectos de la presente investigación, la contextualización se centrará particularmente en el grupo insurgente M-19, el cual nace simbólicamente el 19 de abril de 1970 tras un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales, en las cuales Misael Pastrana candidato del Frente Nacional salió victorioso en contra del candidato popular Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, es preciso mencionar que los inicios del M-19 como movimiento armado realmente se sitúan un par de años atrás. La historia de este grupo insurgente comienza con un pequeño grupo de logística que estaba vinculado a las FARC y al Partido Comunista. Jaime Bateman, quien en 1968 era miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas, empezó a reclutar hombres

para manejar la logística de las FARC en Bogotá, quienes entonces se llamaban Bloque Sur de Guerrillas en Colombia. Sin embargo, como lo narra Riaño (Jaramillo, 2007) cofundador del “Eme”, este nuevo grupo de logística conformado en su mayoría por hombres de clase media y universitarios comenzó a realizar paralelamente acciones militares propias en la búsqueda de una identidad que tuviera concordancia con la ideología de quienes hacían parte de dicho grupo. Sin embargo, entre 1971 y 1972 surge un conflicto interno que representó la salida del grupo de Bateman de las FARC y por ende del Partido Comunista.

Para este grupo, era claro que la lucha armada representaba una vía para la toma del poder, sin embargo, consideraban que la guerrilla colombiana de ese momento no cumplía con ese papel, ya que según Riaño (Jaramillo, 2007) las guerrillas a las cuales el grupo de logística servía eran “guerrillas campesinas, campesinistas, que efectivamente peleaban, resolvían y atendían problemas agrarios” (p.33) Eran guerrillas que venían mayoritariamente de la violencia de los años 50, una lucha agraria por la defensa de la tierra campesina que estaba en manos de los terratenientes y los latifundistas de aquel entonces (Jaramillo, 2007.)

A diferencia de dichas guerrillas campesinas, este grupo consideraba que la lucha guerrillera tenía que transformarse de lucha campesina en lucha por la liberación nacional, buscando resolver problemáticas de índole social y político como la ampliación democrática, la remodelación del sistema político, la redistribución de la riqueza, la educación, salud, nutrición, entre otros (Padilla, 2017). Para Bateman, era evidente entonces que la lucha no podía tener circunscripción territorial, no debía ser únicamente campesina si no que debía ser nacional, razón por la cual conforma un grupo insurgente que fuera capaz de llevar la lucha armada a la ciudad donde se encuentra la verdadera arena política nacional.

Así, en la búsqueda de cumplir con sus objetivos y de ser actores relevantes en la arena política nacional, el nuevo grupo insurgente se reúne tres veces con la ANAPO (Alianza Nacional Popular) durante el segundo semestre de 1973.

Las dos primeras fueron en Cali y la otra en uno de los conventos de Villa de Leyva, en los que se discutió sobre la vigencia de la lucha armada urbana y sobre los principios del nuevo grupo. A finales de 1973, en la finca “Jalisco” del parlamentario anapista Milton Puentes se celebró la primera reunión nacional que luego sería considerada la conferencia fundacional del M-19 (León, 2012, p.103)

De modo que, en la última y más importante reunión quedó claro que la nueva guerrilla urbana podría encontrar en la ANAPO tanto una causa justa para defender como la base social con la cual identificarse.

El 17 de enero de 1974 el M-19 ejecuta su primer operativo como movimiento armado consolidado. El grupo entró a la Quinta de Bolívar, robó la espada que le había pertenecido al libertador y proclamando el eslogan “Bolívar tu espada vuelve a la lucha” (Urán, 2020) marcando el inicio de una de las guerrillas más populares de la historia colombiana.

Además de lo anterior, el M-19 fue reconocido por la realización de operaciones audaces de alto impacto publicitario y político. Ejemplo de ello es, en primer lugar, el robó de más de 5.700 armas de una guarnición militar conocida como el Cantón Norte en el norte de Bogotá durante el año nuevo de 1979. En segundo lugar, la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá en 1980, operación que tenía como fin exigir la liberación de presos políticos del grupo y denunciar la crisis de derechos humanos en Colombia. En tercer lugar, la toma de las instalaciones de la escuela El Remanso y del Idema del barrio Bello Horizonte al suroriente de Bogotá en 1980. En cuarto lugar, el asalto al Batallón Cisneros en la ciudad de Armenia en octubre de 1985. Por último, la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, la cual fue considerada como su operación más significativa (Comisión de la Verdad, 2010).

Así, las estrategias políticas llevadas a cabo por el grupo insurgente respondían a las particularidades sociales, políticas y económicas que atravesaba la Colombia del momento. La forma desacertada en que el gobierno nacional respondía a las peticiones de cambio por parte de la sociedad civil a finales de la década de los 70, promovió todo tipo de reacciones en los diferentes grupos sociales, especialmente, en los grupos armados insurgentes. Por tal motivo, es imperante dar cuenta del panorama sociopolítico de Colombia entre 1978 y 1985, enfatizando el proceso de negociación entre el grupo armado M-19 y el gobierno nacional en 1984.

En la década de los 70, el Estado colombiano al igual que otros países latinoamericanos motivados por las ideologías de los países de primer mundo, fortaleció de manera significativa la lucha contra el comunismo a través de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional de acuerdo con las directrices trazadas desde gobiernos como el de Jimmy Carter (Lora, 2007). Vale la pena mencionar, que para la época la lucha contra el comunismo no era ninguna novedad, en América Latina esta dinámica tiene antecedentes al Frente Nacional (1958-1974) pues después de las dos guerras mundiales la polarización ideológica se apoderó de los países del primer mundo y de los jóvenes países

latinoamericanos, democracia o comunismo han sido desde entonces los dos grandes modelos que dividen al mundo, y que en su momento alimentaron además de las estrategias geopolíticas del nuevo orden mundial, las luchas sociales de los países en desarrollo, en particular de Centro y Suramérica. (Lora, 2007)

Las inconformidades y la falta de espacios de participación política para la oposición motivaron la movilización de grupos armados de fundamentación socialista y comunista, tales como los FARC, el ELN, el EPL a nivel rural y el reconocido movimiento guerrillero urbano M-19 que representaban para el país una amenaza interna.

En estas condiciones, el 14 de septiembre de 1977 las centrales obreras convocaron a un paro cívico sin antecedentes en la historia del país. Los trabajadores y diferentes sectores populares se movilizaron para mostrar la inconformidad generalizada con el gobierno del entonces presidente López Michelsen (1974-1978). Para este momento, la capacidad de convocatoria y organización social de la protesta se configuró para la sociedad civil como un gran avance en lo referente a la manifestación social. No obstante, esta movilización fue leída por el gobierno nacional como "subversiva y política", dejando como única opción de respuesta la represión violenta a través de la Fuerza Pública (Lora, 2007).

Este ambiente de represión no va a ser distinto al del primer gobierno posterior a la culminación del Frente Nacional, el de Julio Cesar Turbay (1978-1982), pues el mandatario no descartó los avances legislativos alcanzados por su antecesor ni favoreció las condiciones para la protesta de los sectores populares o el ejercicio de la oposición por parte de los sectores políticos no tradicionales (Lora, 2007) Así, tan solo unos meses después de su posicionamiento como presidente Turbay expidió el decreto 1923 conocido como estatuto de seguridad.

La implementación del estatuto en Colombia representó la doctrina de seguridad nacional. Bajo este contexto, las Fuerzas Armadas consideraron necesario combatir al enemigo interno que amenazaba los intereses nacionales, es decir, la insurgencia comunista (El Tiempo, 2010). Aquello llevó a los militares a considerar que cualquier opositor o crítico al Estado era una amenaza a los valores políticos trascendentales de la nación y que debía ser castigado por ello. De este modo, durante aquella época los académicos, intelectuales y personas del común, al igual que organizaciones internacionales, denunciaron abusos de los militares y repetidas violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, la experiencia de los diferentes grupos armados no fue ajena a las dinámicas represoras y violentas del momento. Durante la presidencia de Turbay los movimientos insurgentes fueron los principales protagonistas de la realidad política colombiana, por

encima de los partidos y grupos de la izquierda democrática debido a que abandonaron su estrategia de defensa en las montañas del país y se convirtieron en interlocutores políticos con el Estado, a la vez que la acción militar asumió carácter ofensivo (Parada, 2012). El posicionamiento de los diferentes grupos insurgentes en la arena política nacional y particularmente en los centros urbanos se debió también a la ejecución de operaciones políticas de alto impacto para la época, como por ejemplo el robo de las armas al Cantón Norte del Ejército, en Bogotá durante 1978, el cual inmediatamente desató una feroz persecución por parte de las Fuerzas Armadas sobre el M-19, situación que terminó en la detención de una parte significativa de sus militantes y dirigentes (Parada, 2012). La reacción de los militares provocó graves afectaciones en el grupo armado, pues en pocas semanas el Ejército Nacional no solo recuperó la mayor parte del arsenal que había sido robado, sino que desvertebraron parcialmente la organización y colocaron en prisión a buena parte de su comando central. Tiempo después, el M-19 se reorganizó rápidamente y contraatacó al gobierno con golpes publicitarios, asaltos a algunas poblaciones y toma a sedes de medios de comunicación. Pero la acción más audaz fue la toma de la embajada de la República Dominicana el 27 de febrero de 1980, en la cual quedaron como rehenes 12 embajadores y cerca de 40 diplomáticos, entre los cuales se encontraban el Nuncio Apostólico y el Embajador de Estados Unidos.

Esta operación político-militar le permitió al M-19 dar a conocer sus fines políticos y abrir la discusión sobre la paz y la democracia; tópico que era de mayor interés para un sector de la izquierda y de la opinión nacional.

Entre todas las guerrillas, el M-19 fue quien promovió con mayor diligencia esta nueva estrategia expresada en propuestas de paz como “el gran diálogo nacional”. Para el efecto, propusieron realizar una mesa de diálogo con una comisión de personalidades en Panamá (Parada, 2012). Durante dos años el M-19 se mantuvo firme en la búsqueda de ese objetivo, que en el corto plazo suponía una amnistía completa que Turbay nunca concedió. Sin embargo, debido a la fuerte presión de la opinión pública el gobierno configuró una Comisión de Paz que presidió Lleras Restrepo la cual se desmoronó por la carencia de la amnistía. Durante este periodo de incertidumbre y descontento generalizado, el M-19 ejecutó múltiples acciones militares de peso para presionar la negociación y minimizar el consejo de guerra aplicado a sus cuadros, en la cárcel La Picota (Parada, 2012). Sin embargo, ante la imposibilidad de la negociación y el “gran diálogo nacional” del M-19 y otros grupos insurgentes con ese gobierno retomaron con gran fuerza la lucha armada.

Una vez concluido el periodo presidencial de Turbay en 1982, se esperaba que el gobierno entrante concentrara sus esfuerzos en combatir la insurgencia. Pero, el cambio de década trajo consigo grandes dificultades, entre las que se destacaron la comercialización y masificación de las sustancias alucinógenas a finales de la década de los 70 (López, 2017). La ola de violencia generada por los carteles de narcotráfico combinada con la incapacidad del gobierno para generar respuestas pertinentes y eficaces al estallido social del momento, acompañaron el recrudecimiento de la violencia en las zonas urbanas del país.

Bajo este contexto, el recién posesionado presidente de la República Belisario Betancur debía afrontar retos enormes. Por un lado, la violencia del momento requería de acciones contundentes por parte del gobierno para desarticular el narcotráfico y asegurar la paz en el territorio. Por otro lado, se esperaba la continuación de las estrategias de combate contra los grupos armados insurgentes.

Diferente a lo esperado, Betancur llegó a la Presidencia de la República proponiendo políticas que iban en contra de los lineamientos del partido Conservador que promovía la acción armada como única forma para culminar el conflicto. Por el contrario, la propuesta pacífica de Betancur incluía negociaciones y diálogos con los diferentes actores armados (Padilla, 2017). Se debe destacar que sus propuestas conciliadoras y su discurso pacificador contó con un gran respaldo nacional, principalmente por el desgaste del discurso represor de su predecesor (Patiño et al. 2009).

De esta manera, a escasos días de su posesión como presidente, Betancur asumió la tarea de estudiar detenidamente la propuesta de paz hecha por el M-19 durante la administración de Turbay (1978-1982). El primero de estos acercamientos a la iniciativa de paz por parte del grupo insurgente se dio tiempo después de la toma de la embajada de República Dominicana, operación político militar que “le permitió al M-19 dar a conocer sus objetivos políticos y abrir la discusión sobre la paz y la democracia; tópico que era del mayor interés para un sector de la izquierda y de la opinión nacional” (Parada, 2012, p.161). Dicha propuesta estaba enfocada en tres grandes aspectos: lucha por la amnistía, apertura democrática y dialogo con el gobierno para una eventual pacificación. No obstante, como se había mencionado anteriormente, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo consensuado entre los líderes del grupo insurgente y el gobierno nacional, particularmente con el expresidente Turbay, el grupo insurgente retomó la lucha armada y lanzó una ofensiva militar de gran envergadura a través de diferentes operativos.

Bajo este contexto, se auguraban aires de negociación. Desde la administración pasada se habrían efectuado esfuerzos para situar la posibilidad de diálogos de paz entre el gobierno

nacional y la insurgencia a la arena política nacional (Padilla, 2017). Siendo así, se anunció la reintegración y ampliación de la Comisión de Paz el 27 de agosto de 1982, la cual llevó a cabo el diálogo con los diversos sectores sociales y propuso escenarios relacionados con el gasto público, la justicia, la seguridad y el desarrollo de las regiones marginadas, con el fin de consolidar los esfuerzos propuestos en materia de paz (Padilla, 2017).

A pesar de la importancia que tenía para la paz la creación de una Comisión que velara por un diálogo justo e inclusivo, era de conocimiento público que el aspecto más grueso del tema de la paz en ese momento se centraba en el proyecto de Ley de Amnistía que fue sancionado por el presidente Belisario Betancur tan sólo cuatro meses después de iniciado su mandato. Este proyecto de ley representó para el país la amnistía más amplia decretada hasta ese momento en Colombia (Comisión de la Verdad, 2010). La amnistía fue concedida a los autores, cómplices o encubridores de los delitos políticos cometidos hasta la fecha y quienes estuvieran vinculados a la organización por facilitarlos, procurarlos, consumarlos u ocultarlos. Además, cabe mencionar que aunque la amnistía no requería la entrega de las armas, sí se condenaba drásticamente a quien por cualquier medio importe, fabrique, repare, almacene, conserve o suministre a cualquier título o porte armas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares o de Policía (Comisión de la Verdad, 2010).

Una vez aprobada la Ley comenzaba a sentirse un gran malestar por quienes consideraban inaceptable la concesión de amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de delitos políticos cometidos antes de la vigencia de la presente Ley además de la ambigüedad del texto en algunos temas como por ejemplo el porte de armas. De este modo, Padilla (2017) sostiene que la Ley de Amnistía fue condenada al fracaso desde sus inicios, ya que las ambigüedades que presentaba podían ser un arma de doble filo, en tanto podía detener la violencia de los diferentes actores armados en el conflicto o corría el riesgo de terminar en un fracaso total propiciando el recrudecimiento de la guerra.

En este punto, resulta oportuno mencionar la posición de las fuerzas armadas respecto al proceso de paz y la ley de amnistía. El modo de operar y la mentalidad dominante de una parte significativa de las Fuerzas Militares que se desarrolló en tiempos del estatuto de seguridad durante el gobierno antecesor persistieron durante el mandato de Betancur, por lo tanto, a pesar de que el jefe de Estado es el comandante supremo de las Fuerzas Militares y, en consecuencia, éstas debían acatar la aproximación del nuevo gobierno frente a la solución negociada del conflicto, la realidad operacional y el legado de las medidas adoptadas durante el anterior gobierno hacían que estos dos conceptos fueran prácticamente incompatibles (Comisión de la Verdad, 2010, p. 38).

De modo que para las Fuerzas Militares la concesión de una amnistía general y la posterior liberación de presos políticos de los diferentes grupos armados era inconcebible. La única estrategia que parecía razonable y que para estos podía dar resultados exitosos en la lucha contra la insurgencia era el enfrentamiento armado, razón por la cual la propuesta de paz de Betancur nunca fue vista con buenos ojos e incluso llegó a ser considerada una ofensa. Por otro lado, a pesar de que el M-19 tenía un gran interés en negociar con el presidente Betancur, era enfático respecto a su preocupación con la nueva Ley de amnistía y las implicaciones que tendría para la negociación. Para Jaime Bateman la concesión de amnistía general no era suficiente, se debía firmar una tregua bilateral porque de otro modo, una tregua unilateral sería una entrega y el grupo insurgente no estaba dispuesto a entregarse y mucho menos rendirse. Debía existir compromiso de ambas partes, firmar un acuerdo del cese al fuego bilateral e inmediatamente transitar al diálogo nacional para que se inaugurara una etapa de apertura democrática en Colombia (Jaramillo, 2007).

La tensión que se produjo respecto a las particularidades de la Ley de amnistía generó zozobra y desconfianza desde los inicios, llevando a que posterior a la ejecución de la Ley y después de la liberación de muchos presos políticos, el M-19 optara por seguir armado, contrario a lo que el país esperaba (Padilla, 2017). De esta forma, los diálogos de paz con el M-19 comenzaron su marcha un tanto incierta, ya no con simples dudas sino con opositores anónimos que después definiría Morales (1991 como se citó en Padilla, 2017) como “enemigos agazapados de la paz”.

Finalmente, en agosto de 1984 Bernardo Ramírez exministro de comunicaciones suscribió en Corinto, Cauca el acuerdo de paz con el M-19 (Jaramillo, 2007). Ese fue quizás el hecho más importante del año, por primera vez un presidente de la república aceptaba una tregua de carácter bilateral con un movimiento insurgente que más adelante se reflejaría en un proceso de diálogo nacional que para ese momento no sería otra cosa que mesas de trabajo en lo social, lo político y lo económico. (Jaramillo, 2007)

Comenzó entonces una marcha un tanto incierta, ya no con simples dudas sino con opositores anónimos empeñados en perjudicar este proceso. Razón por la cual, en la lucha del presidente Betancur por proseguir los diálogos reitera constantemente su responsabilidad ante la paz dejando en claro que lucharía por ella, así fuera solo (Padilla, 2017).

Pero, los problemas de información, de orden público y de malestares políticos y sociales llegarían al gobierno un tiempo después, y terminarían finalmente en las cenizas del Palacio

de Justicia, acabando con todo lo logrado: la Ley 35 de 1982¹, el acuerdo de Corinto y un sinnúmero de reuniones en diferentes países del mundo (Padilla, 2017).

El año de 1984 fue difícil para los diálogos, pues aunque se lograron avances significativos en materia de acuerdos con distintos grupos insurgentes, hubo grandes retrocesos y un cambio drástico del gobierno nacional en materia política, pues la racha de secuestros, la ola de violencia y la incertidumbre que se generó en 1983, además de los complejos problemas económicos que surgieron en 1982, impidieron que los esfuerzos del gobierno nacional por pacificar un país que llevaba más de tres décadas de violencia dieran resultados efectivos (Padilla, 2017).

La literatura colombiana ofrece diferentes explicaciones respecto a las razones que llevaron a los acuerdos de Corinto a su fin. Algunas de ellas son: ambigüedades en la ruta del dialogo nacional, rechazo a la ampliación democrática y la ley de amnistía, la poca disposición de las Fuerzas Militares de cooperar durante el proceso de negociación y la ambigüedad del tratado (Patiño et al. 2009). Además, la literatura sugiere que hubo una fuerte incidencia de la prensa debido a que muchas veces fue confusa, polarizada e incluso malintencionada, lo que eventualmente generó repentinos cambios en el apoyo y legitimización de la sociedad civil frente al proceso de paz (Padilla, 2017). Por otro lado, Arenas (1990, como se citó en Padilla, 2017) a través de una compilación de reportajes y documentos da cuenta de momentos complejos entre las partes durante el proceso de negociación y da a entender que a pesar de que existía un compromiso entre las partes, era evidente que se mantuvo un discurso hostil durante las negociaciones, pues más allá del papel y el formalismo, debía darse una realización efectiva de una serie de condiciones que debían cumplirse para pactar la paz.

A pesar de que la academia colombiana ha propuesto explicaciones pertinentes a partir de las dificultades de la época en que se dieron los acuerdos de Corinto, el presente trabajo de investigación considera que hasta el momento no se han sugerido explicaciones contundentes que aborden el proceso de negociación mismo. Pues lo que se ha presentado aborda consideraciones externas al proceso de negociación que si bien pudieron intervenir en que los acuerdos de Corinto tuvieran complicaciones, no logran explicar de manera acertada las fallas que tuvo el proceso de negociación entre el grupo insurgente y el gobierno nacional, y que eventualmente termino en la ruptura del acuerdo y el recrudecimiento de la violencia.

¹ La ley 35 de 1982: "Por La cual se decreta una amnistía y se dictan normas tendientes al restablecimiento y preservación de La paz". <https://www.lexbase.co/lexdocs/indice/1982/10035de1982>

Bajo este contexto, que igualmente estaba permeado por una fuerte ola de violencia a nivel nacional, el año 1985 inició con constantes violaciones a la tregua por parte del M-19 y de las Fuerzas Armadas, dando cuenta de que evidentemente no hubo un proceso de paz sensato y por lo tanto, era insostenible. A su vez, el panorama a nivel nacional era bastante desalentador, Ana Carrigan (1993, como se citó en Urán, 2020) asegura que la situación general del país se deterioró en materia de seguridad porque la guerra entre el grupo armado y el Ejército se estaba cobrando nuevas vidas entre los líderes del M-19 en las zonas urbanas del país. Los combatientes de ambos lados continuaron con su enfrentamiento acusándose mutuamente de traicionar el espíritu y la letra de los acuerdos de paz.

El desenlace de esta ola de violencia, operaciones militares y asesinatos entre ambas partes del conflicto fue la Toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 el 6 de noviembre de 1985, una de las mayores tragedias que ha golpeado la justicia colombiana y a la cual acobija una gran incertidumbre. (Uran, 2020).

2. Marco Teórico

Con el objetivo de identificar la incidencia de ambos conceptos en el proceso de negociación entre el gobierno nacional y el grupo armado M-19 durante la administración de Betancur (1982-1986) es pertinente realizar una contextualización teórica sobre los estudios académicos nacionales sobre los procesos de negociación en Colombia, las discusiones teóricas en torno a ambos conceptos tanto en la teoría de relaciones internacionales como en la teoría sobre guerras civiles y la pertinencia del análisis de ambos problemas para la academia nacional.

Acuerdos y negociaciones de paz:

La literatura colombiana que aborda teóricamente el conflicto armado suele realizar en primer lugar una distinción entre acuerdos de paz y negociaciones de paz. En palabras de Hernández (2016) los orígenes de los acuerdos de paz se encuentran en el concepto de construcción de la paz que surge a comienzos de la década de los 90 y cuya intencionalidad se relaciona tanto con el tránsito de la violencia destructiva a un compromiso social constructivo (Lederach, 2008, como se citó en Hernández, 2016) como con la “consolidación y fortalecimiento de la paz para prevenir la reactivación de conflictos” (Boutros-Ghali, 1993 como se citó en Hernández, 2016, p. 38). Por tal razón, aunque el concepto de construcción de paz aún es nuevo para la academia, es indiscutible su carácter propositivo, esperanzador y positivo.

La construcción de la paz es un proceso bastante complejo que requiere de un plazo considerablemente largo para efectuarse pues involucra a diversos autores y se expresa, según Lederach (2008, como se citó en Hernández, 2016) en varias dimensiones: de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y del centro hacía afuera. La literatura afirma que debido a las condiciones de desigualdad, la brecha social de determinados países y el conflicto que se ha desarrollado en torno a ello debe priorizarse una dimensión de abajo hacia arriba (Hernández, 2016). Además, para que el proceso de construcción de paz en Colombia presente resultados positivos debe tener obligatoriamente un énfasis territorial.

Hernández (2016) identifica siete ejes de acción para la construcción para la paz: primero, generar condiciones para asegurar una vida digna; segundo, la resolución de los conflictos debe ser pacífica; tercero, prestar atención integral a las víctimas; cuarto, quienes han optado por la violencia como mecanismo de lucha deben reintegrarse a la vida civil; quinto, reconstrucción de los daños causados; sexto, creación de políticas públicas para la paz y finalmente, proponer una educación especial para la paz que posibilite el cierre del ciclo de la violencia.

Es justamente en el eje de transformación pacífica de los conflictos, donde se sitúan las negociaciones de paz. Hernández (2016) afirma que algunos investigadores para la paz señalan que en el marco del conflicto interno iniciar negociaciones es muy complejo y resulta casi imposible terminarlas con éxito, sobre todo en conflictos armados prolongados y arraigados como el que se libra en Colombia.

Hernández (2014, como se citó en Hernández, 2016) entiende negociaciones de paz como una modalidad de gestión pacífica de los conflictos armados, que se materializa en procesos, en los que las partes en disputa buscan, mediante el diálogo y los acuerdos, alternativas para su transformación. Este tipo de negociación puede llevarse a cabo de manera directa o mediante la intervención y guía de un tercero y suele estar compuesto de tres etapas: prenegociación, negociación y post-acuerdo.

Normalmente, las negociaciones de carácter formal tienen una fase previa en donde se define el marco mediante el cual se van a efectuar, lugar, condiciones, garantías, etc. Por su parte, Hernández (2016) entiende las negociaciones como una “modalidad de gestión pacífica de conflictos armados, que se materializa en procesos, en los que sus partes buscan, mediante el diálogo y los acuerdos, alternativas para su transformación” (p. 41).

Por otra parte, Fisas (2004, como se citó en Hernández, 2016) afirma que es menester considerar que este tipo de proceso conlleva unas exigencias mínimas para su ejecución: carácter voluntario, una hoja de ruta mutuamente acordada, un nivel de convicción

considerablemente alto de las partes en la negociación, flexibilidad, transparencia, confidencialidad, disposición para generar confianza y habilidad para reducir al máximo diferencias, al tiempo que se desarrolla al máximo las compatibilidades.

Ahora es pertinente señalar que las exigencias señaladas anteriormente representan para los actores un reto similar a las asimetrías de información y el problema de compromiso en el momento de entablar procesos de negociación que sean efectivos y duraderos. De esta manera, algunas de ellas hacen parte de dinámicas propias de los problemas señalados en el presente estudio y que se abordaran a continuación. Razón por la cual, se considera que el cumplimiento efectivo de estas exigencias podría afectar positivamente la negociación entre la insurgencia y el gobierno nacional que esté liderando este proceso e incluso evitar que surjan asimetrías de información pero sobre todo problemas de compromiso entre las partes. Por esto, en el apartado de análisis se tendrán presentes las anteriores consideraciones a la luz de los conceptos empleados en el presente estudio, permitiendo un abordaje teórico mucho más completo que permita ofrecer a la academia marcos analíticos novedosos para el entendimiento de las negociaciones de paz en Colombia.

Para lo que respecta a problemas de compromiso, el análisis de resultados tendrá en consideración especialmente el nivel de convicción en el acuerdo de paz como alternativa más eficiente que la continuidad del conflicto armado, transparencia entre las partes y la disposición para generar confianza, ya que si las partes negociadoras no están efectivamente convencidas de que el acuerdo de paz es una alternativa eficiente para el conflicto, no se generaran las condiciones para que este sea exitoso y cumpla los objetivos trazados entre ambas partes negociadoras. Asimismo, la disposición para generar confianza es de gran importancia para que disminuyan los problemas de compromiso durante el proceso, si los actores se disponen a generar incentivos para que su contra parte confíe en ellos tanta incertidumbre sobre el cumplimiento de que los términos del acuerdo y por ende ambas partes direccionarían sus esfuerzos en sacar adelante el acuerdo en lugar de generar situaciones que revelaran el nivel de compromiso de su contraparte negociadora.

Por su parte, la transparencia es un factor que impacta positivamente el surgimiento de asimetrías de información durante el proceso de negociación. La transparencia en la comunicación entre las partes negociadoras respecto a su capacidad armamentista y la voluntad de negociar disminuiría los incentivos para que alguna de las partes oculte o tergiverse la información ante su o sus contrapartes ya que todas las demás están siendo

honestas respecto a informaciones de gran importancia para el proceso, lo que finalmente podría resultar en un acuerdo de paz exitoso y beneficioso para todas las partes.

Negociaciones de paz en Colombia:

Por su parte, la sistematización de más de 123 trabajos académicos entre libros, revistas científicas y documentos electrónicos que presenta Gutiérrez Loaiza (2012) respecto a las negociaciones de paz en Colombia entre 1982-2009 ofrece consideraciones metodológicas y teóricas significativas para el presente estudio.

Partiendo de los resultados obtenidos en su análisis, Gutiérrez (2012) afirma que respecto a la producción académica sobre los múltiples grupos ilegales que han participado históricamente en el conflicto armado el “49% de la documentación está referida a las FARC-EP” (p. 184) dando cuenta de que la capacidad militar y el peso político que adquirió este grupo insurgente a lo largo de la historia contemporánea de Colombia representa para la academia un foco de estudio, pues de todos los textos trabajados en el estudio, 16 hablan exclusivamente de él y los demás lo hacen en forma compartida con otros grupos al margen de la ley. Ahora, respecto a la epistemología de los textos, “el 87,7% describen los procesos de paz, mientras que el 16,3% sugieren como deberían ser los procesos de paz” (p. 185). Por otro lado, con relación a las dificultades que han enfrentado los procesos de paz, el estudio de Gutiérrez (2012) sugiere que la primera de las dificultades que atraviesan los procesos de paz tiene que ver con el paso de la insurgencia a la participación política (de grupo ilegal a partido político); lo anterior se corrobora a partir de los ejemplos del M-19, el PRT, el EPL, la CRS, el FFG y las FARC-EP quienes tuvieron grandes dificultades en ese sentido pues aquellos grupos que intentaron conformarse como alternativa al poder fallaron en el intento. Además, afirma que la perpetuidad de la violencia a través de atentados selectivos contra los miembros de los grupos armados que han incursionado en procesos de paz ha representado históricamente un gran reto durante el proceso de negociación y el post acuerdo. Los casos en los que más se observa esta característica han sido: M-19, EPL, CGSB, AUCE, ELN Y FARC-EP. (Gutiérrez, 2012)

Adicionalmente, se ha podido evidenciar una gran dificultad en términos de operatividad y consenso por parte de los presidentes que han liderado procesos de negociación en medio del conflicto armado interno en Colombia. Se debe mencionar que tradicionalmente se ha hecho de forma directa entre el gobierno nacional y un solo grupo insurgente. Frente a esto, el estudio de Gutiérrez (2012) sugiere que la dificultad radica en el hecho de convertir la paz en varios procesos paralelos de negociación, en otras palabras, el gobierno nacional negocia con cada grupo, no con el conjunto de grupos armados al margen de la ley, hecho

que representa un gran obstáculo para lograr la paz en general. Así mismo, Gutiérrez (2012) plantea que las negociaciones de paz se han visto en muchos casos afectadas por la falta de apoyo y disposición de las fuerzas armadas y del régimen político de turno, ya sea porque los partidos tradicionales o las elites cercanas al poder ejecutivo no apoyan los procesos.

Por las consideraciones anteriores, es posible afirmar que la producción académica sobre las negociaciones del M-19 con el gobierno colombiano es mucho menor, a diferencia de la documentación existente sobre los procesos de negociación con otros grupos insurgentes, particularmente las FARC, de acuerdo con el estudio de Gutiérrez Loaiza (2012). Además, considerando que el M-19 tuvo dos procesos de negociación y respectivamente dos acuerdos de paz con gobiernos diferentes, la literatura colombiana ha tendido a abordar particularmente el acuerdo de paz de 1990 firmado con la administración del expresidente Virgilio Barco pues considera que este fue exitoso ya que aseguro la desmovilización y el desarme del grupo armado a diferencia de los acuerdos de Corinto llevados a cabo durante la administración Betancur (1984) que terminaron en el recrudecimiento de la violencia con los eventos del Palacio de Justicia.

Por otro lado, durante la búsqueda de información lo que se ha podido encontrar es que la mayoría de los trabajos escritos respecto a los procesos de negociación del M-19, particularmente aquel que corresponde a este proyecto de investigación, son de carácter principalmente descriptivo y no analítico, exceptuando el trabajo de Padilla (2017) quien realiza un análisis de la incidencia de los diferentes actores en los diálogos de paz. Razón por la cual se considera importante realizar un análisis de la negociación del grupo insurgente M-19 con el gobierno de Belisario Betancur, ya que al ser el primer intento de negociación y acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la insurgencia, sentó un precedente para los procesos de negociación posteriores de los diferentes gobiernos de turno con algunos grupos insurgentes como el más reciente caso de la Habana con las FARC.

Además, permite realizar un aporte teórico a una dimensión del M-19 que no se ha abordado tanto históricamente, la negociación. Si bien del grupo insurgente se ha publicado mucho, particularmente respecto a su modo de operar, popularidad, estrategia publicitaria y operaciones significativas como la toma del Palacio de Justicia, respecto al proceso de negociación que se aborda en este estudio, no existe una cantidad de literatura considerable que permita entender las particularidades del momento y las razones por las cuales ese proceso de negociación en particular falló. Asimismo, la poca literatura existente

respecto al caso en estudio no ofrece explicaciones innovadoras, contundentes y/o satisfactorias para entender los motivos que condujeron este intento de negociación a su fin.

En consecuencia, ante la ausencia del uso de referentes teóricos para analizar los diferentes procesos de negociación con la insurgencia en el país, considero pertinente traer a discusión los conceptos de problemas de compromiso y asimetrías de información, propios de los estudios sobre política exterior y empleados recientemente en investigaciones sobre guerras civiles. El uso de estos conceptos le ofrecería a la producción académica nacional sobre conflicto armado referentes teóricos novedosos para analizar las negociaciones de paz en el país, pues en un conflicto armado tan arraigado como el colombiano, entender que quizás las negociaciones entre la insurgencia y el gobierno nacional han fallado por problemas aparentemente tan simples como el compromiso y la información permite que la academia repense los marcos de análisis que se han empleado históricamente para analizar estos procesos y a su vez situé su atención en las particularidades de la negociación y el comportamiento de los actores que interactúan. Pues, no dar muestras de una efectiva voluntad para comprometerse al acuerdo o por otro lado, tergiversar información valiosa respecto a la capacidad armamentística propia con el fin de obtener un mejor beneficio para sí mismos en una negociación de carácter bilateral puede llevar al fracaso un proceso arduo de negociación e incluso concluir en el recrudecimiento del conflicto.

Al utilizar estos conceptos, pretendo llevar adelante una reconstrucción original de la negociación del grupo insurgente M-19 con el gobierno de Belisario Betancur en 1984 que complemente la producción académica existente respecto este proceso, a través de explicaciones alternativas sobre los factores que incidieron en el rompimiento de los acuerdos de Corinto y que posteriormente terminaron en la intensificación del conflicto con la toma del Palacio de Justicia.

Acercamiento teórico a las negociaciones políticas en el marco de la teoría de las relaciones internacionales:

Históricamente, los estudios de relaciones internacionales han enfocado los análisis sobre las negociaciones políticas durante la guerra en la arena internacional, en donde los actores principales suelen ser los Estados. Quienes, en la búsqueda de obtener el control sobre recursos naturales o humanos, exigir un desarme del bando enemigo o imponer algún tipo de tributo, ideología o religión toman la decisión de irse a guerra (Fearon, 1995). El acertijo central sobre la guerra que ha acompañado a los académicos busca entender por qué si

las guerras son costosas los líderes deciden igualmente llevarlas a cabo en lugar de encontrar un acuerdo que les evitaría incurrir en los costos de la lucha.

Fearon (1995) afirma que la academia en busca de darle solución al acertijo ha propuesto tres tipos de argumentos. En primer lugar, se puede partir del supuesto de que los líderes son irracionales y por ende, están sujetos a una serie de sesgos que podrían llevar tanto a descuidar los costos de la guerra como a malinterpretar cómo sus acciones podrían llegar a producir una. En segundo lugar, se puede afirmar que debido a que los líderes no asumen los costos directos de la guerra (económicos o físicos) a diferencia de los soldados que prestan servicio o la ciudadanía que asume más impuestos, estos tienden a considerar que la guerra es una buena opción pues les permitiría en un futuro disfrutar de posibles beneficios en caso de salir victoriosos, particularmente si el líder está en busca de una reelección o necesita niveles más altos de aprobación. Finalmente, el tercer argumento propone que, incluso si los líderes fueran racionales y consideraran los riesgos y los costos de la guerra, podrían concluir que la guerra es la mejor opción.

Para efectos de la presente investigación, se tendrá en consideración únicamente el tercer argumento expuesto por James Fearon (1995) denominado explicaciones racionalistas para la guerra². Así, cabe mencionar que históricamente la literatura ha aceptado la utilización de cinco argumentos racionalistas sobre las causas de la guerra: 1) anarquía; 2) beneficios esperados mayores que los costos esperados; 3) guerra preventiva racional; 4) error de cálculo racional debido a la falta de información; y 5) error de cálculo racional o desacuerdo sobre el poder relativo.

Fearon (1995) afirma que los primero tres argumentos simplemente no abordan la cuestión de qué impide a los líderes estatales negociar para llegar a un acuerdo que evite los costos de la lucha. Por su parte, los argumentos cuarto y quinto abordan la cuestión, sosteniendo que los líderes racionales deciden no someterse a un acuerdo negociado debido a que muchas veces estos no cuentan con información suficiente respecto a la capacidad armamentística y la voluntad de negociación de su contraparte. Por lo tanto, ante la incertidumbre de no saber si su contraparte dispone de una mayor capacidad armamentística que sí mismos y qué tan efectiva sea su voluntad de someterse a un

² Fearon (1995) Afirma que el primer y segundo argumento puede suponer un comportamiento racional por parte de los líderes individuales; es decir, la guerra puede ser racional para los líderes civiles o militares si disfrutan de diversos beneficios de la guerra sin sufrir los costos impuestos a la población. Sin embargo, considera que aunque los planteamientos del segundo y primer argumento son muy importantes empíricamente, no los aborda en este estudio debido a que es sumamente engorroso y requeriría de una etiqueta más precisa para el tema, como por ejemplo: "explicaciones racionales del actor unitario"

acuerdo de paz, la guerra resulta ser la mejor opción. Sin embargo, para el autor ningún argumento explica concretamente qué impide que los líderes racionales utilicen la diplomacia u otras formas de comunicación para evitar errores de cálculo tan costosos e ir a la guerra.

En este sentido, ante la incapacidad de los argumentos discutidos anteriormente para resolver teórica y empíricamente el acertijo, surge la búsqueda por explicaciones alternativas que efectivamente puedan hacerlo. El autor ofrece tres respuestas potenciales para el enigma anteriormente planteado, la primera respuesta sugiere que los líderes racionales pueden ser incapaces de encontrar una solución negociada mutuamente preferible a la guerra debido a que no tienen certeza de que la información que tienen respecto a la capacidad armamentística de su oponente y su voluntad de negociación sea verídica ya que en este tipo de negociaciones suelen generarse incentivos para que los actores exageren o tergiversen este tipo de informaciones para obtener un mejor acuerdo para sí mismos una vez se discutan los términos del proceso. La segunda respuesta, afirma que los líderes racionales pueden ser incapaces de llegar a un acuerdo mutuamente negociado debido a problemas de compromiso creíbles entre las partes, situaciones en las que los líderes no pueden demostrarle a su contraparte que los términos del acuerdo van a cumplirse efectivamente en el tiempo. De este modo, si un acuerdo no puede hacerse cumplir en el largo plazo y deja a una o varias partes vulnerables a ataques o abusos, entonces una victoria militar decisiva puede considerarse la forma más segura de resolver un conflicto. La tercera opción de respuesta sugiere que los líderes de los Estados tal vez no puedan encontrar una solución pacífica debido a la cuestión de las indivisibilidades durante el proceso de negociación. Para los actores es difícil llegar a acuerdos negociados si no pueden dividir los intereses por los que luchan, si lo que está en juego durante el proceso de negociación es principalmente indivisible, de modo que ninguna de las partes puede obtener la mayor parte de lo que quiere sin privar al otro, las negociaciones tienden a no tener éxito.

Para efectos de lo que se quiere lograr en la presente investigación, consideraremos únicamente las primeras dos: problemas relacionados a la información privada sobre el otro o los otros Estados respecto a sus capacidades armamentistas y problemas de compromiso entre ambos actores en disputa. No será tomada en cuenta la tercera opción de respuesta debido a que en la negociación que se está desarrollando en este estudio no hubo un problema de indivisibilidad entre las partes, ya que desde los primeros acercamientos entre el gobierno nacional y la insurgencia, se dejó en claro que existía la posibilidad de conceder

ciertas peticiones y negociar los términos de algunas de las demandas del M-19 que giraban principalmente entorno a aspectos de participación e inclusión política de otros sectores en los espacios de toma de decisiones a nivel nacional. (Padilla, 2017.)

Aproximación teórica a las negociaciones políticas en el marco de los conflictos intraestatales:

Hechas las consideraciones anteriores, es preciso indicar que desde comienzos del siglo XXI los investigadores empezaron a considerar la utilización de nuevos referentes teóricos para analizar conflictos armados internos en casos como África, el Medio Oriente y Sur América. De tal modo que los investigadores sobre conflictos internos identificaron que tanto la asimetría de información como el problema de compromiso abordados ampliamente por la teoría de relaciones internacionales para entender las negociaciones interestatales, representan igualmente un gran reto para aquellos países en donde se libran guerras civiles, con la diferencia significativa de que para el caso de la guerra civil, el gobierno nacional participa como combatiente en el conflicto contra otro grupo organizado dentro del territorio, lo cual podría representar un mayor reto para la negociación (Sambanis, 2004). Además de los actores que participan en este tipo de proceso, es importante señalar que, por lo general este tipo de conflictos suelen ser más frecuentes, más letales y prolongados que los conflictos interestatales (Mattes y Savun, 2009). Razón por la cual resulta más difícil generar mecanismos que permitan establecer la paz a largo plazo. La regularidad con la que se presentan las guerras civiles y los retos para resolverlas hacen que la adopción de políticas más eficaces sea tanto una preocupación importante para la comunidad internacional como una necesidad para asegurar el bienestar de quienes se encuentran en medio de este tipo de enfrentamientos (Mattes y Savun, 2009).

Asimetrías de información:

La teoría ha demostrado que si las partes involucradas en una disputa tuvieran a su alcance información completa sobre el resultado de una guerra, casi siempre preferirían un acuerdo a los costos y riesgos del conflicto (Fearon, 1995). Sin embargo, las guerras persisten en parte porque los actores no tienen certeza sobre algunos aspectos de su contraparte que son de gran importancia para este tipo de procesos como la capacidad armamentística y voluntad de negociación, pues lo general los actores que se vinculan a este tipo de acuerdos tienen información privada que prefieren que su contraparte no conozca completamente ya que en un futuro puede ser de gran utilidad para sí mismo, como por ejemplo su estrategia militar (Walter, 2009). De este modo, las asimetrías de información ocurren cuando una de las partes negociadoras es consciente que tiene más información valiosa que su oponente

y la usa de manera tergiversada o exagerada para obtener un mejor acuerdo para sí mismos en comparación con su contraparte.

Así, ante la imposibilidad de obtener información verídica de carácter relevante para la negociación, la guerra pareciera ser la única estrategia eficiente para revelar características de su oponente respecto a su capacidad militar y su voluntad de negociación. Asimismo, la decisión de retomar la lucha armada ante una situación donde persisten las asimetrías de información es considerada por los líderes como una solución mucho menos costosa en comparación a las afectaciones que podría sufrir en caso tal de que su oponente efectivamente tenga mayor capacidad armamentista y por ende la posibilidad de que este salga victorioso sea mucho mayor. No se trata simplemente de un error de cálculo debido a la mala información, sino de dinámicas estratégicas que resultan de la combinación de asimetría de información e incentivos para tergiversar.

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente mencionar que existe a su vez, una serie de mecanismos paralelos que permiten revelar esas informaciones que tienden a ser de carácter confidencial. Para efectos del presente proyecto consideraremos particularmente a los medios de comunicación, pues tanto la teoría como la historia han dado cuenta de que esta herramienta es sumamente valiosa, pues a través de esta fuente de información se puede filtrar información confidencial que permita que las dos partes negociadoras identifiquen características de su oponente que son de carácter vital para la negociación. Sin embargo, cabe mencionar que así como este canal de comunicación puede disminuir la asimetría de información entre las partes también puede ser usado por alguna de las partes negociadoras como un medio para comunicarle a su contraparte información que ha sido tergiversada y/o exagerada con el fin de que incida en el desarrollo de la negociación y de esta manera puedan asegurar un mejor acuerdo para sí mismos.

Con base a lo anterior, el análisis de resultados buscaba dar cuenta de la incidencia que tuvo la prensa en el rompimiento de los acuerdos de Corinto, particularmente respecto a informaciones relacionadas con la capacidad armamentista y estrategia militar que se pudieron haber tergiversado y difundido a través de este medio de comunicación y que generaron asimetrías de información entre las partes.

Walter (2009) afirma que las asimetrías de información son particularmente graves en las guerras civiles por al menos dos razones. En primer lugar, la información sobre la capacidad militar de los grupos rebeldes muchas veces tiende a ser confusa y difícil de obtener, pues si la contraparte fuera un Estado, la información sobre la fuerza y las capacidades de su gobierno probablemente estaría en exhibición o sería de acceso público, pero la información

sobre el tamaño de los bloques de los grupos armados insurgentes, sus flujos financieros, el grado de apoyo entre la población, y su organización es generalmente inaccesible.

Además, cabe mencionar que existe la posibilidad de que los rebeldes desconozcan el grado de su propia fuerza si no se lleva a cabo primero una batalla y construyan apoyo con el tiempo. En ese sentido, la segunda razón sugiere que incluso si los grupos armados tuvieran conocimiento total sobre sus capacidades armamentistas, existen incentivos particularmente fuertes para ocultar esta información a un gobierno nacional cuyo control sobre las fuerzas armadas le daría la posibilidad de explotar fácilmente esta información para reprimir al grupo.

En comparación al manejo que se le puede dar a la información privada por parte de los grupos insurgentes, los jefes de Estado tienen mucha más dificultad para proteger o hacer un uso intencionado de este tipo de información, debido a que por lo general suele ser de carácter público para toda la ciudadanía, exceptuando algunas operaciones de carácter confidencial o exclusivas de las Fuerzas Armadas.

Hechas las consideraciones anteriores, vale la pena mencionar que en el apartado de análisis de resultados, las preguntas de la encuesta y la entrevista a expertos se plantearon para identificar si esta situación se presentó el proceso de negociación particularmente respecto a la capacidad armamentista del M-19, ya que como se ha dicho reiteradamente para las Fuerzas Armadas suele ser mucho más difícil identificar la capacidad armamentista y la estrategia militar de su contraparte debido a que incluso muchas veces el mismo grupo armado la desconoce. Igualmente, se tuvo en consideración la percepción de ambos actores sobre la voluntad de su contraparte con el acuerdo, particularmente la de las Fuerzas Armadas, ya que en el apartado de Contexto Histórico se evidenció el descontento y rechazo de este actor con el proceso de paz con la insurgencia desde los primeros acercamientos del presidente Betancur con los líderes del M-19.

Problemas de compromiso:

Por otra parte, el presente artículo considera que los problemas de compromiso durante una negociación pueden generarse debido a que se presentan situaciones en las que ni el gobierno ni los militantes del grupo insurgente pueden comprometerse de manera creíble a mantener el acuerdo negociado en el futuro una vez las circunstancias cambien (Mattes y Savun, 2009). De este modo, el gobierno no puede confiar en que los rebeldes pongan fin a su accionar militar una vez que se les hayan concedido concesiones, pues en lugar de desmovilizarse, el grupo insurgente podría presionar por concesiones aún mayores. Igualmente, los líderes de los grupos insurgentes que están liderando el proceso de

negociación no pueden confiar plenamente en que el gobierno cumpla con su parte del trato, ya que una vez que el grupo armado abandone su campaña militar, el gobierno como resultado de la consolidación de su poder en el curso del proceso de paz, tendrá una ventaja negociadora significativa. (Mattes y Savun, 2009)

Además, Kirschner (2010) afirma que, en las guerras civiles los problemas de compromiso tienen un grado de complejidad similar al de los problemas de información, pues por lo general los grupos armados al margen de la ley deben ceder poderes y someterse a un proceso de desarme y reincorporación a la vida civil. En ese sentido, los problemas de compromiso ocurren cuando los combatientes no están seguros de si su oponente mantendrá los términos de un acuerdo de paz si las circunstancias futuras cambian.

De manera similar, Thomson (2020) sostiene que el desarme de los insurgentes después de una negociación en el marco del conflicto civil puede ser particularmente difícil, un aspecto crítico es que el desarme de los insurgentes puede verse perturbado por problemas de compromiso creíbles. Dichos problemas son similares a un dilema de seguridad en el que ambas partes (particularmente quienes deben desarmarse) temen que la otra parte no cumpla el acuerdo y/o los ataque violentamente cuando son vulnerables, lo cual finalmente puede dar lugar a retrasos en el desarme o incluso a un retorno a la lucha.

El principal desafío en un problema de compromiso consiste en que, incluso si los actores llegarán a ser confiables y tuvieran una verdadera intención de implementar un acuerdo en su totalidad, es probable que los mismos pudieran ser incapaces de convencer a su oponente de que efectivamente se va a cumplir lo que se pactó y que seguirán siendo dignos de confianza en el futuro.

Llegados a este punto, vale la pena mencionar que existe un tipo de información diferente a la mencionada en el subapartado anterior que afecta el compromiso entre las partes durante el proceso de negociación. Se trata de un problema de mala comunicación entre las partes que puede verse afectado por factores externos como chisme, inconsistencia en una de las partes debido a la influencia de un actor ajeno al proceso, mensajes inoportunos de la prensa, diferencias internas de los grupos negociadores como por ejemplo el grupo armado y/o el gabinete presidencial, etc. Este tipo de información suele tener un impacto negativo en las negociaciones debido a que podría llegar a perjudicar significativamente el compromiso, alguna de las partes negociadoras podría decidir retirarse del proceso simplemente porque alguno de los factores mencionados puso en duda el compromiso de la contraparte de mantener los términos del acuerdo en un futuro una vez las circunstancias cambien.

Según se ha visto, existen múltiples factores que constituyen un problema de compromiso para este tipo de negociaciones de paz. Vale la pena mencionar, que algunos de estos tienen mayor relevancia para la negociación y podrían llegar a incidir de manera más significativa que otros, al punto de obligar a alguna o varias partes de la negociación a desertar del acuerdo inicial. La presente investigación considera que uno de esos factores es el cambio en la distribución de poder una vez firmado el acuerdo, en el marco de un conflicto civil dichos cambios suelen hacerse más notorios durante el proceso de desarme a través del dilema de seguridad que enfrentan los militantes de los grupos armados, debido a que por lo general los grupos rebeldes son especialmente aprensivos de abandonar las armas en caso de que el gobierno haga uso de su posición ventajosa para acabar con sus enemigos cuando son más vulnerables (Thomson, 2020). En este tipo de negociaciones la seguridad es vital, los actores deben generar fuertes incentivos para que su contraparte negociadora sienta seguridad durante el proceso de negociación, pero sobre todo una vez el acuerdo esté firmado e inicie el proceso de desarme. Este punto es clave, si alguno de los dos actores (particularmente la insurgencia) no confía plenamente en que su vida va a estar segura una vez inicie el proceso de desarme, las probabilidades de desertar de un acuerdo de paz son significativamente altas.

De este modo, respecto a los problemas de compromiso el análisis de resultados del presente trabajo de investigación buscó determinar el nivel de importancia de la seguridad para ambos actores durante el proceso de negociación, posibles perjuicios e incidencia en el rompimiento de los acuerdos de Corinto. Además, para este tipo de problemas es pertinente analizar la situación que se presentó entre el gobierno nacional y el Ejército, ya que es probable que la notoria diferencia de opiniones respecto al manejo que debía dársele a la insurgencia pudo haber incidido negativamente en la negociación y en la perspectiva del M-19 frente al compromiso de la comisión negociadora y el gabinete presidencial.

3. Análisis de resultados

Con el fin de analizar el papel de ambos conceptos en los acuerdos de Corinto se emplearon dos técnicas de análisis de información de carácter cualitativo. De este modo, se analizó la incidencia de cada uno de dichos conceptos de manera independiente en el rompimiento de los acuerdos y posteriormente se realizó una comparación entre ambos para identificar cual tuvo un mayor grado de afectación sobre el fallido desenlace de este proceso.

En primer lugar, se realizó una encuesta a veinte expertos en materia de negociaciones de paz, M-19 y conflicto armado que constituye la base fundamental de este análisis, la cual

buscó identificar la presencia de ambos problemas (compromiso e información) durante el intento de negociación entre el gobierno nacional y el movimiento M-19 a través del comportamiento de las partes negociadoras y los medios de comunicación tradicionales que circulaban en aquella época. De este modo, esta encuesta permitió reconocer principalmente las tensiones existentes entre los diferentes actores de la sociedad que participaron de manera directa o indirecta en el rumbo de los acuerdos de Corinto, las perspectivas de las dos partes negociadoras, niveles de confianza de confianza de los mismos respecto a sus contra parte y la ambigüedad respecto a una posible incidencia de los medios de comunicación en el marco de los acuerdos de Corinto.

En segundo lugar, se llevaron a cabo dos entrevistas de manera complementaria a expertos en materia del conflicto armado, M-19 y acuerdo de Corinto. Siendo así, Carlos Moreno (Universidad Icesi), y José David Moreno Mancera (Universidad Jorge Tadeo Lozano) ofrecieron aportes teóricos e históricos de gran importancia que complementan y enriquecen con matices e información verídica la encuesta mencionada anteriormente con el fin de ofrecer apreciaciones acertadas y contundentes sobre la incidencia de ambos problemas en el rompimiento de lo que fue el primer intento de negociación entre un grupo armado y el gobierno colombiano.

A continuación, se hará en primer lugar un análisis de los problemas de compromiso seguido de un análisis de las asimetrías de información entre las partes en disputa. Ambos a partir de los resultados obtenidos a través de las dos técnicas de recolección de información mencionadas anteriormente. Finalmente, se realizará a manera de cierre de este apartado una comparación entre los resultados obtenidos para cada uno de los conceptos, con el objetivo de identificar el grado de incidencia de ambos problemas en el caso de estudio y determinar si alguno de los dos generó una mayor afectación en el proceso de negociación.

Problemas de compromiso:

En 1983 Alvaro Fayad realizó una entrevista en Ecuador, en la cual se abordó el proyecto de ley de amnistía que estaba llevando a cabo el presidente Betancur en Colombia, la disposición del gabinete presidencial con la paz y las expectativas con el nuevo gobierno de turno, particularmente respecto a la posibilidad de entablar negociaciones de paz. El M-19 como actor armado, da cuenta de una indisposición frente a las particularidades del proceso de negociación y las incongruencias de la ley de amnistía, principalmente respecto al proceso de desarme. Fayad afirmó públicamente que si bien ellos aceptaban la amnistía, no entregarían las armas, pues para el grupo armado estas representaban la única

posibilidad en Colombia de hacer oposición. (Fayad, 1983, párr. 5) Además sugerían que lastimosamente Betancur fue negligente durante el momento de la negociación pues pactó con los monopolios, se dejó encerrar y chantajear por los militares y basó su gobierno en los dos partidos tradicionales: liberal y conservador (Fayad, 1983, párr. 5)

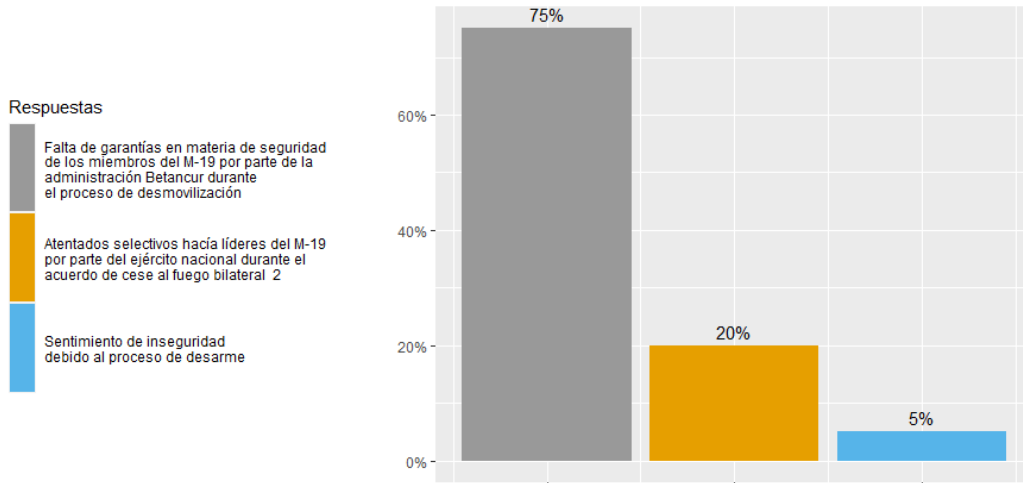
La anterior cita trae a colación una de las etapas más difíciles durante el proceso de negociación y donde normalmente surge un problema de compromiso, el proceso de desarme. Tal y como se discutió en el apartado de marco teórico, Thomson (2020) plantea que el desarme de los insurgentes después de una negociación es particularmente difícil ya que uno de los factores que agrava la situación es que dicho proceso puede verse perturbado por problemas de compromiso creíbles, los cuales a su vez son similares a un dilema de seguridad en el que ambas partes (particularmente quienes deben desarmarse) temen que la otra parte no cumpla el acuerdo y/o los ataque violentamente cuando son vulnerables. Por otro lado, si bien es cierto que el M-19 consideraba que Betancur era un hombre de buenas intenciones, que se alejaba un poco del estereotipo de político conservador y que mostraba una verdadera voluntad de cambio (Fayad, 1983) también es cierto para el M-19 y sobre todo para Fayad que a veces las buenas intenciones no son suficientes para llevar a cabo un cambio estructural como se lo pensaba el movimiento armado.

Del mismo, las preguntas correspondientes a esta sección giran alrededor de la discusión sobre los problemas de compromiso que se generaron entre las partes negociadoras durante el momento de la negociación. Así, las respuestas de los encuestados buscan complementar e ilustrar las afirmaciones de Alvaro Fayad respecto a la percepción que se tenía sobre el manejo que se le estaba dando desde el gobierno central al proceso de negociación con el M-19 particularmente en materia de seguridad para los militantes del grupo armado.

Gráfica #1: Factores que afectaron en el compromiso del M-19 durante los acuerdos de Corinto.

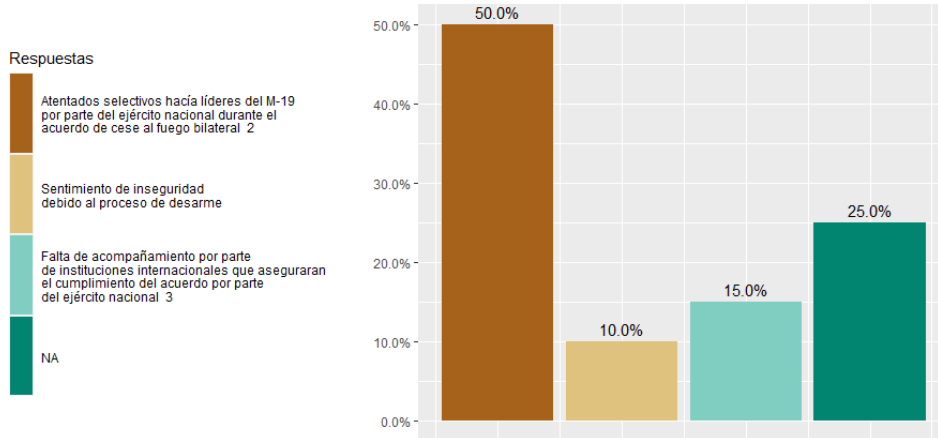
1.1

¿Qué factores afectaron el compromiso del M-19 durante los acuerdos de Corinto con el gobierno de Belisario Betancur ?
Escoja 2 en orden de preferencia



1.2

¿Qué factores afectaron el compromiso del M-19 durante los acuerdos de Corinto con el gobierno de Belisario Betancur ?
Escoja 2 en orden de preferencia



Como se evidencia en las gráficas, sobre los factores que incidieron en el compromiso del M-19 durante los acuerdos, los encuestados tenían la posibilidad de escoger 2 opciones de respuesta en orden de preferencia. En ese sentido, la gráfica 1.1 da cuenta de que el 75% de los encuestados consideró como primer factor de incidencia “falta de garantías en materia de seguridad de los miembros del M-19 por parte de la administración Betancur durante el proceso de desmovilización” y, en la gráfica 1.2 se evidencia que el 50% de los encuestados seleccionó como segunda opción los “atentados selectivos hacía líderes del M-19 por parte del ejército nacional durante el acuerdo de cese al fuego bilateral”. Como se puede evidenciar a través de las respuestas de los encuestados y las afirmaciones hechas por Fayad durante la entrevista, la situación en materia de seguridad durante los acuerdos

fue sumamente compleja particularmente para el grupo insurgente que estaba comprometido con un proceso de cese al fuego y desarme. Las múltiples ofensivas de las que fueron víctimas tanto líderes como militantes del grupo armado representaron una razón de peso para el M-19 en el momento en que tomó la decisión de retirarse de la mesa de negociación y por ende, acabar con el acuerdo. De este modo, es posible afirmar que para este caso particular, ante la falta de seguridad y confianza del grupo armado, particularmente en el momento en que hubo un cambio significativo en la balanza de poder y estos aceptaron los requerimientos propuestos por la comisión negociadora, la solución que pareció más viable y efectiva para el M-19 fue retomar la lucha armada.

Esta situación es comparable con el dilema propuesto por Kirschner (2010) quien sugiere que en las guerras civiles los problemas de compromiso presentan grados de complejidad significativamente mayores en comparación con las guerra entre Estados, pues por lo general este tipo de procesos conlleva unas exigencias mínimas por parte de los grupos insurgentes para asegurar el cese de la violencia en los diferentes territorios en los que operan, en donde cabe resaltar el proceso de desarme y reincorporación a la vida civil. De esta manera, una vez se toma la decisión de ceder capacidad militar y someterse a estos procesos, los problemas de compromiso ocurren cuando los combatientes no están seguros de si su oponente mantendrá los términos del acuerdo de paz una vez las circunstancias futuras cambien. Razón por la cual, ante la incertidumbre sobre el cumplimiento de lo acordado, es preferible retomar la lucha armada y tener la posibilidad de salir victorioso ante su oponente.

La difícil situación por la que a travesaba el M-19 se debía principalmente a una mala relación que se agravo con el Ejército Nacional en el transcurso del gobierno anterior. Carlos Moreno, uno de los entrevistados, considera que la política de seguridad de Turbay al estar relacionada con dinámicas de opresión y violencia lógicamente estaba enfocada en desarticular a la insurgencia y particularmente a aquella que operaba en las zonas urbanas de la ciudad como era el caso del M-19. Todos los esfuerzos del gobierno nacional y las Fuerzas Armadas por acabar con la insurgencia se tradujeron en un debilitamiento importante del grupo armado en términos urbanos (C.E. Moreno, comunicación personal, 23 de abril de 2021).

Sin embargo, para José David Moreno, una vez inicia el periodo presidencial de Betancur, la situación en términos de lo que se debería hacer con los grupos armados cambia considerablemente, ya que el expresidente como gesto para negociar la paz establece la liberación de los miembros del M-19 y múltiples guerrillas que habían sido capturados por

las Fuerzas Armadas en el gobierno anterior, cosa que para las guerrillas es considerado un acto de disposición al diálogo pero para las Fuerzas Armadas es una traición (J.D Moreno, comunicación personal, 23 de abril de 2021)

Ese sentimiento de traición se tradujo en un desacato a las directrices dadas por el presidente de la república respecto al manejo que debía dársele al M-19 ahora que se encontraba vinculado a un proceso de negociación. Se esperaba que las Fuerzas Armadas respetaran la orden del cese al fuego y que por ende, no atacaran los campamentos del grupo armado ni atentaran contra la vida de sus militantes. Contrario a lo acordado, el Ejército Nacional se tomó la libertad de darle manejo propio a la insurgencia a través del combate en campo y los asesinatos selectivos.

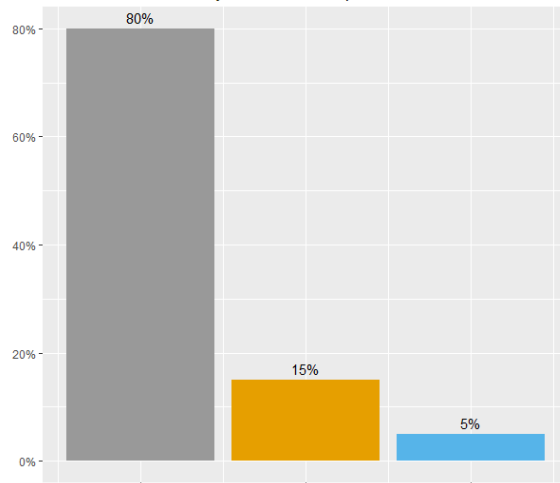
De las consideraciones ofrecidas por los dos entrevistados, se puede corroborar que los resultados expuestos en ambas gráficas que pretendían identificar los factores que afectaron en el compromiso del M-19 durante los acuerdos de Corinto responden a unas tensiones significativas entre el Ejército Nacional y el grupo insurgente que han incrementado considerablemente desde el cambio de administración. Esos sentimiento de traición e irrespeto por los esfuerzos que se habían realizado desde el Ejército para desarticular a la insurgencia en la administración anterior se materializaron a través de múltiples atentados hacia los militantes y los líderes del M-9 durante el proceso de negociación, situación que finalmente obligó a los líderes y militantes del “Eme” a tomar la decisión de levantarse de la mesa de diálogo y retomar la lucha armada. Es por esta razón que en los diferentes comunicados publicados durante este periodo Fayad es tan enfático en asegurar que debido a los diferentes malentendidos con la fuerza pública el grupo armado no podía en ninguna circunstancia abandonar completamente la lucha armada, ya que el gobierno no tenía las herramientas necesarias para asegurar el bienestar de los militantes del M-19 que habían aceptado vincularse al acuerdo de paz.

Gráfica #2: Factores que afectaron el compromiso del gobierno de Belisario Betancur durante los acuerdos de Corinto

2.1

¿Qué factores afectaron el compromiso del gobierno de Belisario Betancur durante los acuerdos de Corinto con el M-19 ?
Escoja 2 en orden de preferencia

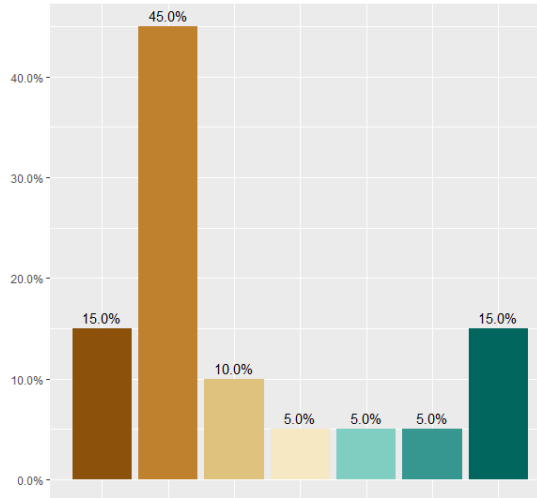
- Respuestas
- Falta de voluntad del ejército nacional de someterse a un acuerdo de cese al fuego bilateral con el M-19
 - Desconfianza de una efectiva voluntad de los dirigentes del M-19 de acogerse al tratado
 - Incertidumbre ante una posible ruptura en la coalición de gobierno con las élites políticas conservadoras que estaban en contra del acuerdo de paz.



2.2

¿Qué factores afectaron el compromiso del gobierno de Belisario Betancur durante los acuerdos de Corinto con el M-19 ?
Escoja 2 en orden de preferencia

- Respuestas
- Presiones por el malestar de la población civil en contra de un acuerdo de paz con el M-19
 - Incertidumbre ante una posible ruptura en la coalición de gobierno con las élites políticas conservadoras que estaban en contra del acuerdo de paz.
 - Desconfianza de una efectiva voluntad de los dirigentes del M-19 de acogerse al tratado
 - Sospecha de una posible conformación de grupos disidentes del M-19 tras la reinsertión de los excombatientes a la vida civil
 - La falta de respaldo de los partidos políticos y el establecimiento económico
 - Las élites se resistían a pactar la paz con una guerrilla y presionaron al presidente en esa dirección
 - NA



Por su parte, respecto a los factores que afectaron el compromiso del gobierno de Betancur, los encuestados tenían igualmente la posibilidad de escoger dos opciones de respuesta en orden de preferencia. En ese sentido, en la gráfica 2.1 se evidencia que el 80% de los encuestados escogió como primera opción “falta de voluntad del ejército nacional de someterse a un acuerdo de cese al fuego bilateral con el M-19” y, correspondiente a la gráfica 2.2 el 45% de los encuestados seleccionó como segunda opción “incertidumbre ante una posible ruptura en la coalición de gobierno con las élites políticas conservadoras que estaban en contra del acuerdo de paz”.

Con un porcentaje de selección del 80% es posible afirmar que el factor que más generó un efecto negativo en el compromiso del gobierno del expresidente Betancur fue la falta de voluntad del Ejército Nacional de someterse a un acuerdo de paz con el M-19. En relación con los resultados presentados en la gráfica 2.1 respecto a los factores que afectaron en el compromiso del M-19 durante los acuerdos de Corinto, el presente trabajo se permite ratificar que la indisposición de las Fuerzas Armadas representó tanto para el M-19 como para el expresidente Betancur un gran reto en la búsqueda de efectuar un acuerdo de paz duradero y con garantías en Colombia. Por un lado, para el M-19 las múltiples ofensivas del Ejército Nacional y la deficiente respuesta de las instituciones nacionales para asegurar el bienestar de los militantes de la guerrilla los obligó a retomar la lucha armada y abandonar los diálogos. Por el otro lado, para el gabinete presidencial y para el expresidente mismo las tensiones con las Fuerzas Armadas perturbaron todo esfuerzo propuesto para mantener las condiciones de los acuerdos y asegurar el bienestar tanto de los militantes del M-19 como de la sociedad civil. Por esta razón, como se mencionó anteriormente para el grupo insurgente la única opción que parecía viable para asegurar su continuidad y participación en la arena política nacional fue retornar a la guerra. Igualmente, ante los múltiples actos de sabotaje del Ejército Nacional en la negociación, el expresidente Betancur no tuvo manera alguna de demostrar que se iba a cumplir lo que se había prometido durante los primeros acercamientos de la comisión negociadora con la insurgencia.

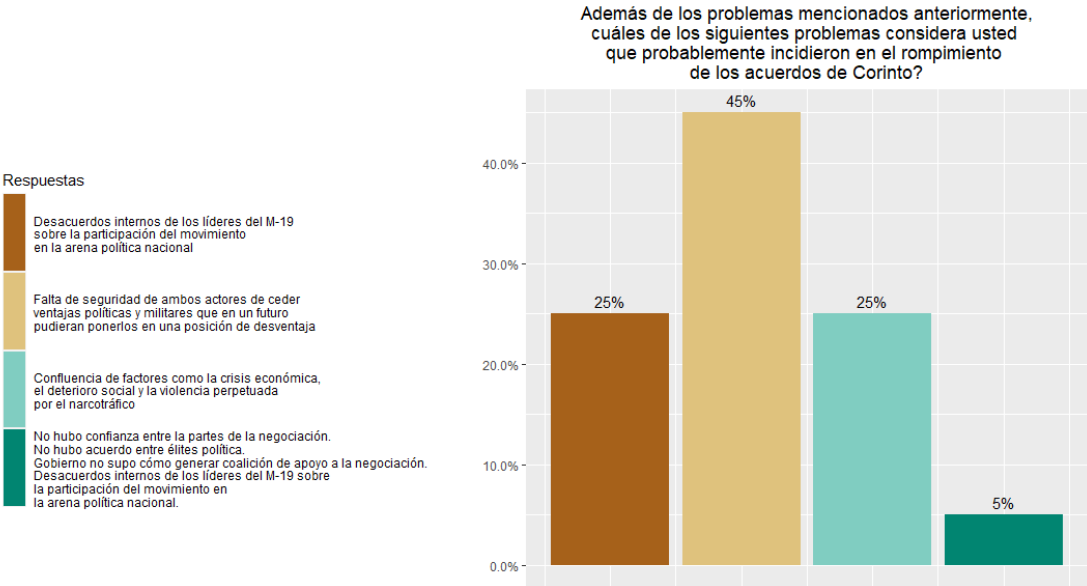
A propósito de lo discutido, es pertinente mencionar que la incapacidad de Betancur de garantizar medidas de seguridad para los militantes del grupo insurgente y demostrar que efectivamente se iba a cumplir lo que se negoció da cuenta de un problema de compromiso profundo. Ya que, a pesar de que Betancur buscó a través de múltiples acciones dar cuenta de que efectivamente estaba comprometido con los acuerdos de paz y con el grupo armado, todas las dinámicas contradictorias mencionadas anteriormente entre lo que buscaba Betancur y por otro lado, lo que rechazaban las Fuerzas Armadas envió al grupo armado un mensaje significativo de que el expresidente no era digno de su confianza y respeto, ya que una vez las circunstancias cambiaron y el M-19 aceptó los términos del acuerdo, empezaron a gestarse una serie de operativos armados por parte del Ejército Nacional para desarticular finalmente la insurgencia cuando esta menos se lo esperaba.

Respecto a la segunda opción de respuesta sobre el rol de las elites conservadoras en el proceso de negociación, los resultados de la encuesta permiten identificar el malestar general de este grupo social con el acuerdo de paz que se efectuó desde presidencia. Sin embargo, aunque la elite conservadora fue muy crítica con el proceso de negociación y

ejerció cierta presión en el gobierno para que este reconsiderara los términos del tratado de paz, no sería pertinente afirmar que en la presión ejercida por este grupo recae toda la responsabilidad de que el proceso de paz haya fracasado, pues si se analizan los resultados obtenidos en esta pregunta la compleja situación que a través de los acuerdos debido a los malentendidos entre el Ejército Nacional y el M-19 representó tanto para los encuestados como para los actores que participaron de este proceso de negociación la razón principal por la cual los acuerdos de Corinto llegaron a su fin y el M-19 retomó la lucha armada.

Gráfica #3: Incidencia de factores externos en los acuerdos de Corinto

3.



En la búsqueda de complementar las dos preguntas anteriores, la pregunta en cuestión se planteó con el fin de identificar si existió la posibilidad de que factores y/o agentes externos a la negociación hayan incidido en el rompimiento de los acuerdos. Sin embargo, entre todas las opciones de respuesta el 45% de los encuestados consideró que el principal problema que hubo durante la negociación y que finalmente condujo a los acuerdos a su fin fue la “falta de seguridad de ambos actores de ceder ventajas políticas y militares que en un futuro pudieran ponerlos en una posición de desventaja”. A propósito de esta elección y de lo discutido en el apartado de marco teórico, es importante recordar que según Fisas (como se citó en Hernández, 2016) este tipo de negociación conlleva unas exigencias

mínimas para su ejecución dentro de las cuales cabe resaltar dos de ellas para este caso particular: nivel de convicción en el proceso considerablemente alto de las partes en la negociación y disposición para generar confianza entre las partes. De este modo, cuando no existen incentivos ni disposición para generar confianza ante su contra parte negociadora lo más probable es que ninguno de los actores se sienta seguro y convencido con los términos del acuerdo firmado, particularmente si conlleva ceder ventajas políticas pero sobre todo militares que los pudieran poner en desventaja en el futuro. Así, lo que finalmente sucedería es que ante la imposibilidad de estar seguros sobre si la contraparte negociadora cumplirá los términos de seguridad del acuerdo una vez se hagan concesiones, el retorno a la guerra en comparación a continuar con la negociación representa para el grupo armado opción mucho más factible y segura.

Por las consideraciones anteriores, es posible afirmar que el M-19 se encontró en esta encrucijada debido a la compleja situación que se había gestado con el Ejército Nacional y la insatisfactoria respuesta que obtuvo por parte de las entidades gubernamentales para asegurar la paz de sus militantes durante el compromiso de cese al fuego. Para el M-19 continuar en la negociación hubiera representado poner en riesgo la vida de un número significativo de militantes de su organización y los objetivos del grupo armado en sí. Razón por la cual, después de mantener por un tiempo considerable los enfrentamientos con el Ejército, los líderes del grupo armado toman la decisión de levantarse de la mesa de negociación y retomar las armas. Así mismo, para el Ejército Nacional la posibilidad de someterse al acuerdo de cese al fuego era impensable, pues debería entonces ceder ventaja militar ante uno de sus principales oponentes, lo que podría dar lugar a una gran ofensiva militar por parte del M-19 en el momento en que el Ejército bajara la guardia. Por esta razón, desde que se entablaron los diálogos con el grupo armado el Ejército Nacional no dejó de manifestar su malestar ante el cese al fuego e idear operaciones para atacar al M-19 que les permitieran ponerse en una posición de fuerza ante su oponente y aseguraran el bienestar y la dignidad de la institución.

Por otro lado, los resultados de esta pregunta resaltan la participación de dos factores externos con un porcentaje de selección del 25% cada uno. De modo que para los encuestados tanto el panorama general del país en términos de la violencia generada por el narcotráfico y la crisis económica, como los desacuerdos que tenían los líderes del M-19 sobre el rol del grupo armado en la arena política nacional una vez se reintegraran a la vida civil representaron un obstáculo durante el proceso de negociación. Pues, por un lado la situación del país en materia de seguridad era cada vez más compleja debido a la violencia

que se generaba por la guerra entre carteles de narcotráfico. Por el otro lado, uno de los factores que generó polémica en el grupo armado era su rol en los espacios políticos una vez se reintegraran a la vida civil, para algunos militantes los objetivos fundamentales del grupo se podían lograr a través de mecanismos democráticos y políticos, y para otro porcentaje considerablemente alto la única forma de lograr cumplir con las metas e ideales del grupo era la lucha armada urbana. Ahora, aunque ambos razonamientos fueron seleccionados por los encuestados, no es posible afirmar si alguno de los dos tiene mayor relevancia o si representan explicaciones alternativas significativas para el presente caso de estudio, debido a que los resultados de las preguntas anteriores dan cuenta de que en términos de compromiso, la compleja situación con el Ejército Nacional fue el factor que afectó de manera decisiva el rumbo de los acuerdos de Corinto.

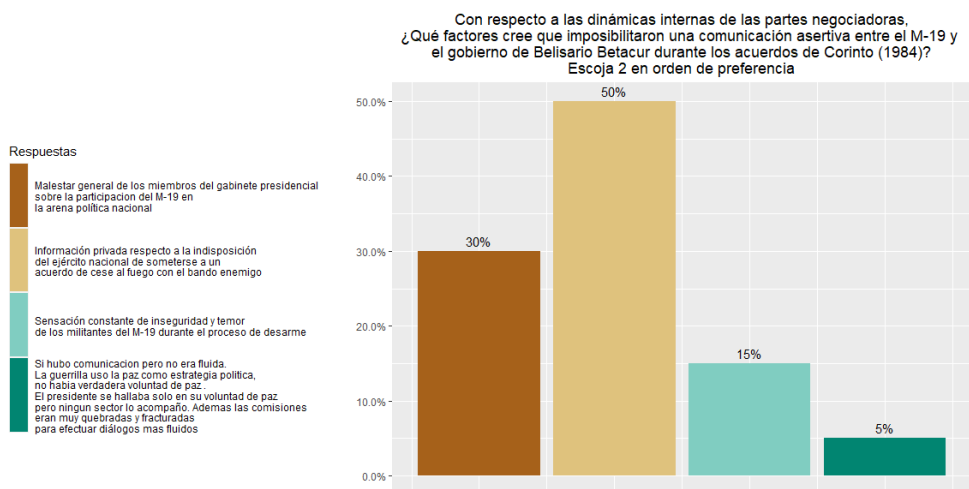
A propósito de lo discutido en el presente subapartado, es pertinente realizar algunas consideraciones finales. En primer lugar, es evidente entonces que la posición que tomó el Ejército Nacional durante el proceso de negociación generó un problema de compromiso desde la presidencia de la república que repercutió significativamente en el desenlace que tuvo el acuerdo de paz. Esta situación que se generó por la posición del Ejército generó una gran preocupación en el M-19 ya que al no contar con el respaldo de este actor durante la negociación se hacía cada vez más evidente que no había garantías de seguridad para los miembros del grupo armado y por ende, romper los acuerdos y retomar la lucha armada parecía ser la mejor opción. En segundo lugar, es posible considerar que entre ambos actores el M-19 fue quien mostró una voluntad significativamente alta de comprometerse a los términos del acuerdo en comparación con su contraparte negociadora hasta que empezaron a generarse operaciones armadas en contra de los líderes del grupo armado y algunas mesas de diálogo en la que se encontraban sus militantes.

Asimetrías de información:

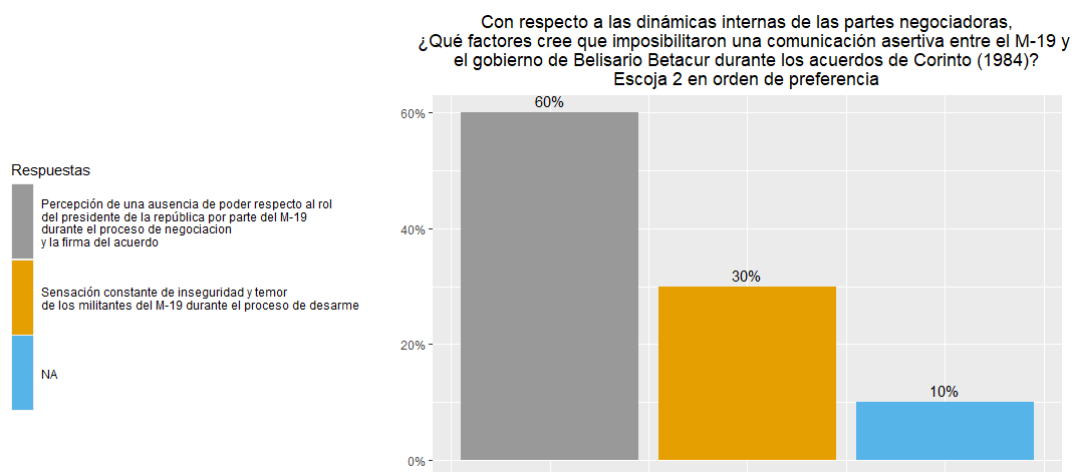
Para abordar adecuadamente el surgimiento de asimetrías de información entre las partes negociadoras las preguntas que se propusieron en este segmento de la encuesta pretendían estudiar las dificultades que tuvo la negociación para lograr una comunicación efectiva entre las partes negociadoras particularmente a lo que respecta a la estrategia militar de ambos actores, su voluntad de negociación y la incidencia de la prensa en el rompimiento de los acuerdos.

Gráfica #4: Factores que generaron asimetrías de información entre el M-19 y el gobierno de Belisario Betancur durante los acuerdos de Corinto

4.1



4.2



Respecto a las dinámicas internas de las partes negociadoras y los factores que imposibilitaron una comunicación efectiva entre las partes, la gráfica 4.1 muestra que el 50% de los encuestados seleccionó como primera opción “información privada respecto a la indisposición del ejército nacional de someterse a un acuerdo de cese al fuego con el bando enemigo”. A su vez, los resultados presentados en la gráfica 4.2 muestran que el 60% de los encuestados escogió como segundo factor de incidencia “percepción de una ausencia de poder respecto al rol del presidente de la república por parte del M-19 durante el proceso de negociación y la firma del acuerdo”

De acuerdo con las consideraciones anteriores, es posible pensar que debido a que el gobierno nacional ocultó la diferencia que tenía con el Ejército Nacional respecto al manejo

que se le estaba dando a la insurgencia, el grupo armado no pudo identificar quien era el autor de todos los ataques armados que se ejecutaron en su contra una vez se firmaron los acuerdos e inicio el proceso de diálogo en Corinto. Por un lado, se pensó que se estaban orquestando desde la presidencia, y por otro lado se sospechaba que quizás las Fuerzas Armadas estaban actuando de manera independiente motivados por las discrepancias que ambos habían tenido en el pasado. Por esta razón, para los dirigentes del M-19 fue complejo identificar si realmente existía voluntad del gobierno nacional y la comisión negociadora de asegurar el éxito de los acuerdos o si por el contrario, el comportamiento de las Fuerzas Armadas daba cuenta de la incapacidad y la poca voluntad que tuvo el expresidente de la república de mantener los términos estipulados en el acuerdo.

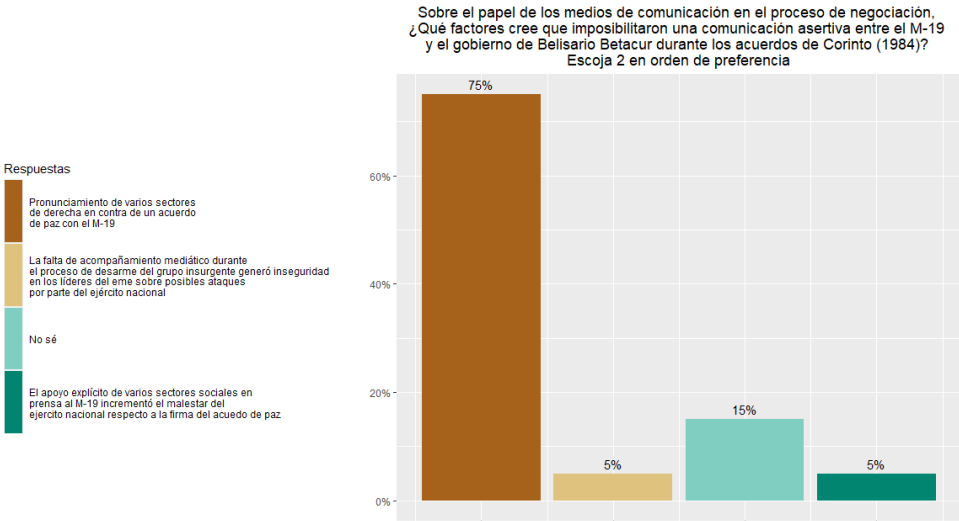
Hechas las observaciones anteriores, cabe traer a colación el análisis de James Fearon (1995) que sugiere que debido a esas dificultades para obtener información verídica sobre aspectos importantes para la negociación sobre la contraparte negociadora como por ejemplo la capacidad armamentística, la estrategia militar de su oponente y su voluntad efectiva de negociación la guerra pareciera ser la única estrategia eficiente para revelar dichas características de su oponente. Esta situación, se puede ver reflejada en el razonamiento detrás de los líderes del grupo armado para decidir desertar del acuerdo de paz y retomar la lucha armada, debido a que la situación del Ejército Nacional se manejó de manera confidencial para los líderes y muchos miembros del M-19 no fue posible identificar si el gobierno nacional tenía una voluntad efectiva de asegurar que los acuerdos se llevaran a cabo de manera efectiva y la seguridad de los miembros del grupo armado se mantuviera intacta. En este sentido, según Walter (2009) las guerras persisten debido a la asimetría de información que se crea entre las partes, para este caso particular respecto a un aspecto tan importante para la negociación como lo es el manejo de las Fuerzas Armadas, ya que finalmente son quienes disponen de la capacidad armamentística del Estado para usarla en contra del M-19. Vale la pena aclarar que a diferencia de lo propuesto en el marco teórico respecto a los incentivos para tergiversar información, en este caso de estudio esta información se mantuvo oculta debido a que se asumió que exponer esta situación podría resultar aún más perjudicial para el acuerdo y daría una mala imagen del expresidente ante su contraparte negociadora y ante la sociedad civil que tenía puestos los ojos en el día a día de esta crónica. (Padilla, 2017)

Como se mencionó anteriormente, los encuestados debían seleccionar en orden de preferencia dos factores de incidencia. Para este caso, la opción más elegida como segundo factor fue “la percepción de ausencia de poder respecto al rol de Betancur durante

el proceso de negociación” la cual se gestó por la fallida o nula respuesta que daba el mandatario ante los ataques militares que cometió el Ejército Nacional contra el M-19, durante el proceso de negociación para el mandatario fue prácticamente imposible asegurar el cumplimiento de los términos del acuerdo particularmente a lo que respectaba en materia de seguridad pues el Ejército Nacional estaba operando independientemente a las directrices que se dieron desde el gobierno nacional y la comisión negociadora una vez se acordó que iba a iniciarse un proceso de negociación con el grupo armado. Por esta razón, se creó una asimetría de información respecto a lo que el gobierno nacional y el Ejército suponían debía hacerse con la insurgencia. Por un lado no existía claridad sobre una efectiva voluntad de negociación del mandatario y por otro lado, parecía que el Ejército estaba determinado a librar una lucha armada que buscara finalmente desarticular al M-19 militarmente.

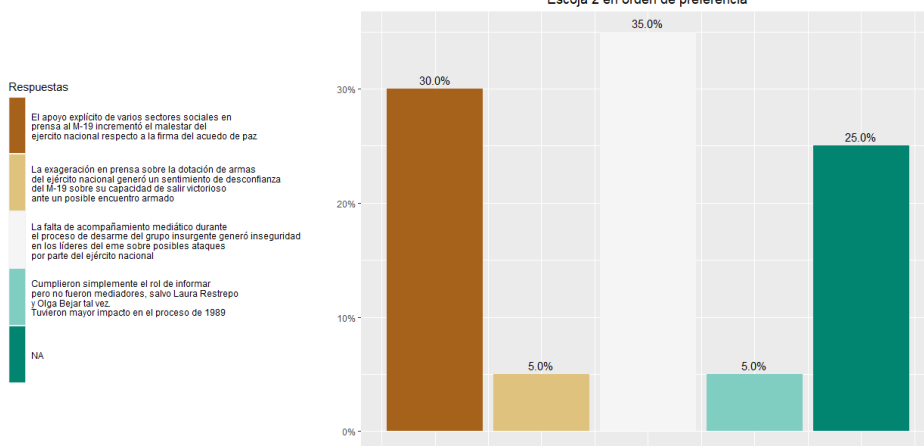
Gráfica #5: Incidencia de los medios de comunicación en el rompimiento de los acuerdos de Corinto

5.1



5.2

Sobre el papel de los medios de comunicación en el proceso de negociación.
 ¿Qué factores cree que imposibilitaron una comunicación asertiva entre el M-19
 y el gobierno de Belisario Betacur durante los acuerdos de Corinto (1984)?
 Escoja 2 en orden de preferencia



La siguiente anterior se propuso considerando la posibilidad de que factores externos a la negociación hayan podido incidir negativamente en generación de asimetrías de información entre las dos partes negociadoras. Para este caso de estudio, se pensó particularmente el rol de los medios de comunicación durante el momento de la negociación. Así, la gráfica 5.1 muestra que el 75% de los encuestados seleccionó como primer factor de incidencia el “pronunciamiento de varios sectores de derecha en contra de un acuerdo de paz con el M-19”. A su vez, los resultados presentados en la gráfica 5.2 muestran que el 35% de los encuestados escogió como segundo factor de incidencia “la falta de acompañamiento mediático durante el proceso de desarme del grupo insurgente generó inseguridad en los líderes del "eme" sobre posibles ataques por parte del ejército nacional”.

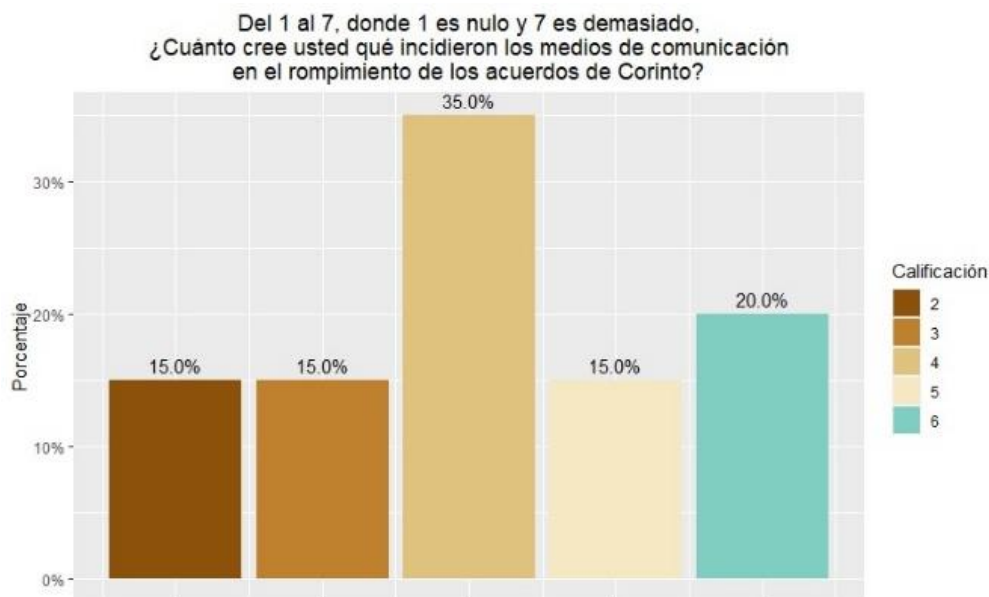
Después de lo anterior expuesto, cabe analizar entonces cual fue el rol de los medios de información durante el proceso de negociación con el M-19. Con un porcentaje de selección del 75% es posible afirmar que el factor que más incidió en que se generara una comunicación poco efectiva entre el M-19 y el gobierno de Belisario Betancur fue el pronunciamiento explícito de varios grupos de derecha en contra de un acuerdo de paz con el M-19. Este resultado corresponde a unas dinámicas que se venían gestando incluso antes de la candidatura del expresidente Betancur, ya que los grupos políticos de derecha se encontraban a gusto con el manejo que se le había dado a la insurgencia durante la administración del expresidente Turbay, los resultados presentados daban cuenta que el combate y la mano dura parecía ser la única herramienta efectiva para desarticular a las guerrillas comunistas que tomaban rápidamente fuerza en el país y la región durante aquella época. Sin embargo, una vez concluido el periodo de Turbay, Betancur afirmó que

mantener la guerra contra la insurgencia era insostenible y que debía proponerse un acuerdo entre el gobierno nacional y los grupos armados ilegales que asegurara la paz en el territorio. Tanto para las Fuerzas Armadas como para algunos sectores políticos dialogar con la guerrilla era inconcebible, pues para estos que el gobierno nacional negociar era sinónimo de ceder ante la criminalidad y por ende, perder una guerra que al Estado colombiano le había costado tanto sacrificio mantener en la búsqueda de erradicar definitivamente la insurgencia de la arena política nacional. Este medio de comunicación ha sido históricamente una plataforma eficiente para ratificar la posición política del grupo social o familiar al que pertenece, durante los acuerdos los grupos de derecha usaron este medio para incidir en la opinión pública y en las decisiones del gobierno nacional respecto a la negociación, situación que finalmente generó una gran presión para el gobierno nacional pues no era ideal que la ciudadanía estuviera en contra del proyecto bandera del presidente, ni que los grupos económicos retiraran su apoyo a los diferentes proyectos que se estaban liderando desde el gobierno nacional por la diferencia de opinión respecto al proceso de paz.

Esta situación podría explicar igualmente lo que los entrevistados consideraron como segundo factor de incidencia que corresponde a la falta de acompañamiento mediático, la explícita indisposición de los grupos de derecha respecto a los acuerdos y su promoción en prensa se pudo ver reflejada en el acompañamiento mediático que tuvo la negociación, particularmente respecto a los procesos del M-19, lo que generó intranquilidad en los líderes del M-19 pues la narrativa sobre lo que estaba sucediendo con los acuerdos podía verse permeada negativamente por los intereses de una clase política particular que vanagloriaban los comportamientos de las Fuerzas Armadas y las diferentes ofensivas de las que fueron víctimas los militantes del grupo insurgente.

Ahora bien, cabe mencionar que si bien la prensa fue una plataforma para que múltiples sectores sociales comunicaran a la población civil su posición ante los acuerdos, no fue un medio que generara o incrementara las asimetrías de información entre las partes respecto a la capacidad armamentística de alguno de los dos actores o su voluntad efectiva de negociación, su rol se limitó únicamente a informar (de acuerdo a los lineamientos de cada periódico) el curso de los acuerdos y las novedades que surgían en el día a día.

Gráfico #6: Grado de incidencia de los medios de comunicación en el rompimiento de los acuerdos de Corinto



Finalmente, la pregunta número 6 buscó identificar el grado de incidencia de los medios de comunicación (particularmente la prensa) en el rompimiento de los acuerdos de Corinto entre el M-19 y el gobierno del expresidente Betancur. Así, los resultados dan cuenta de que el 35% de los encuestados considera que en una escala del 1 al 7 el nivel de incidencia de los medios de comunicación en el rompimiento de los acuerdos corresponde al nivel 4, lo que se podría traducir como una incidencia media/baja. Ahora, si bien el 35% de los encuestados sitúan la incidencia en un nivel medio/bajo no se puede descartar que igualmente la suma de los niveles 5 y 6 también representa un 35%, lo que ya ubicaría dicha incidencia en niveles más altos. De este modo, el análisis de ambos resultados permite dar cuenta de que existió un nivel de incidencia considerable en los acuerdos, pero debido a la división que hay en la opinión de los entrevistados no es posible afirmar que fue un factor que incidió de manera determinante en el curso que tomaron los acuerdos más allá de lo discutido en la pregunta anterior respecto al rol de los medios de comunicación en los acuerdos de Corinto.

José David Moreno menciona que la prensa de la época fue malintencionada pues sabía cómo se debía manejar la opinión pública respecto a la situación de Corinto para lograr ejercer la presión necesaria para que el gobierno reconsiderara los términos del acuerdo de paz y las concesiones dadas a los militantes del M-19. El entrevistado afirma que las negociaciones fueron todo un laboratorio de enseñanzas y aprendizajes de lo que es nuestra cultura política y la manera en la que interactúan diversos actores de la sociedad respecto al manejo que debe dársele a la guerra, particularmente en Colombia. En el caso de los acuerdos, la prensa mostró especialmente las acciones audaces e irreverentes de la

guerrilla pero no mostró un asunto de seriedad que era la paz. (J.D. Moreno, comunicación personal, 23 de abril de 2021)

De este modo, de acuerdo con lo mencionado por José David Moreno y las características de la prensa de la época es posible considerar que este medio de comunicación incidió en la construcción de la opinión pública respecto a los acuerdos particularmente en los momentos de mayor tensión entre las partes, mostrando con mayor énfasis las acciones del M-19 en comparación a las ofensivas ejecutadas por las Fuerzas Armadas. Además, J.D Moreno sugiere que la información que circuló en prensa durante el proceso de negociación criticó lo que representarían en Colombia los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la insurgencia. El entrevistado afirma que la campaña crítica sobre los acuerdos se realizó bajo referentes verídicos y evidentes, ya que al proceso mismo le faltaba organización, una agenda, definir tema, escenarios, entre otras cuestiones y la prensa del momento no sugería explícitamente que la paz fuera buena o no si no que narra perspicazmente el día a día de esta crónica lo que finalmente constituyó una idea negativista sobre el proceso de paz. (J.D. Moreno, comunicación personal, 23 de abril de 2021)

Dicho lo anterior, para este caso particular no se evidencia el uso de la prensa como un canal mediante el cual se pudieran generar asimetrías de información entre las partes, de acuerdo con el razonamiento planteado en el apartado de Marco Teórico. Asimismo, la prensa tampoco fue una herramienta que permitiera resolver las asimetrías de información que surgieron entre las partes negociadoras debido a la dificultad que tuvo el M-19 para identificar la voluntad efectiva de su contra parte negociadora. Sin embargo, como se ha venido discutiendo, este medio de comunicación representó un reto para los actores negociadores debido a la incidencia que tuvo en la construcción de la opinión pública respecto al manejo que se le estaba dando al proceso de negociación y de ahí su importancia para este momento histórico.

A modo de cierre, cabe mencionar que los resultados presentados en el presente subapartado dan cuenta que a pesar de que se generaron asimetrías de información respecto a la voluntad efectiva de negociación, particularmente a lo que respecta la situación con el Ejército Nacional, no se generaron este tipo de asimetrías respecto a la estrategia militar y/o la capacidad armamentística de alguno de los actores que interactuaron durante este proceso de negociación. Sin embargo, vale la pena aclarar que el Ejército siempre tuvo dudas respecto a la voluntad del M-19, pues consideraban que el grupo armado estaba dispuesto a atacarlos una vez estos bajarán la guardia, pues se

suponía que se había acordado un pacto de cese al fuego y por ende no debían estar a la defensiva hacia su contra parte.

Problemas de compromiso y asimetrías de información:

En el orden de las ideas anteriores, es necesario entonces precisar el grado de incidencia de los problemas de compromiso y las asimetrías de información en el rompimiento de los acuerdos de paz entre el grupo insurgente M-19 y el gobierno del expresidente Belisario Betancur. Esto, con el objetivo de identificar si alguno de los dos problemas generó una mayor afectación en el proceso de negociación entre ambas partes. De este modo, una vez analizados de manera independiente los problemas de compromiso y las asimetrías de información, conviene realizar una síntesis que señale las diferencias entre ambos conceptos y a su vez como estas se ven reflejadas en los niveles de incidencia de cada uno en el caso de estudio.

Los resultados de las encuestas y las entrevistas a los dos expertos permitieron identificar una serie de aspectos significativos para el presente caso de estudio. En primer lugar, es evidente que se generaron asimetrías de información respecto a la voluntad efectiva del gobierno nacional de mantener los términos del proceso de paz, debido al manejo privado que se le estaba dando a la situación con las Fuerzas Armadas y los mensajes enviados por los generales del Ejército Nacional, el M-19 nunca logró identificar si efectivamente el gobierno se iba a comprometer con el proceso de paz que se planteó desde los primeros acercamientos. Sin embargo, se debe mencionar que no surgieron asimetrías de información significativas respecto a la estrategia militar y/o la capacidad armamentística de alguna de las partes, más allá del problema que tuvo el Ejército Nacional para identificar la estrategia militar que emplearía el “Eme” para contra atacar cuando estos menos lo esperaran.

En segundo lugar, los problemas de compromiso que se crearon entre las partes negociadoras producto de las tensiones existentes entre las expectativas del Ejército Nacional sobre el manejo de la insurgencia y las directrices que se dieron desde presidencia generaron un impacto negativo significativamente alto para la negociación. Una vez se firmaron los acuerdos, Betancur no tuvo manera de demostrar que se iba a cumplir lo que se acordó durante los primeros acercamientos con los líderes del “Eme”, a pesar de que contaba con disposición para liderar los acuerdos, el manejo autónomo y armado que le estaba dando el Ejército al proceso imposibilitó al mandatario de generar acciones ante su contraparte que les demostraran que existía compromiso para liderar los acuerdos y cumplir

con los términos acordados. Por esta razón, al M-19 no le quedó otra opción que poner fin a los acuerdos de paz y retomar la lucha armada contra el Ejército Nacional.

De lo anterior, se puede concluir que a pesar de que las asimetrías de información pueden generar afectaciones significativas en las negociaciones de paz, para este caso particular no fue evidente primero que efectivamente se crearan asimetrías respecto a la capacidad armamentística de alguno de los dos actores y segundo, que las que surgieron respecto a la voluntad efectiva de negociación de la contraparte incidieran de manera contundente en el proceso. Por este motivo, es posible afirmar que lo que generó un mayor grado de afectación para la negociación fueron los problemas de compromiso entre las partes que empezaron a gestarse desde los primeros acercamientos entre el gobierno nacional y la insurgencia. Las esquivas de Betancur, su falta de participación en las mesas de diálogo y la falta de acciones contundentes ante los ataques que estaba sufriendo el M-19 por parte del Ejército Nacional deterioraron completamente el proceso y obligó a los líderes del M-19 a finiquitar el proceso de negociación. Para el M-19 era claro que a pesar de que Betancur era un hombre de buenas intenciones y que al principio mostró una verdadera voluntad de cambio a veces las buenas intenciones no son suficientes para llevar a cabo un cambio estructural como lo requería este tipo de negociaciones y por eso se vio motivado a buscar nuevamente en la lucha armada el cambio que necesitaba el país dejando atrás todo lo logrado en Corinto y la esperanza de una paz que finalmente no llegó.

Conclusión:

Como se ha venido discutiendo a lo largo de esta investigación, históricamente la academia colombiana ha analizado poco las negociaciones de paz en comparación a otras dimensiones del M-19 como por ejemplo su campaña publicitaria y sus operaciones en las zonas urbanas. En ese sentido, se considera que esta aproximación es útil porque agrega a través del uso y el análisis de dos conceptos múltiples reflexiones que permiten de manera sistemática comprender las diferentes negociaciones y acuerdos de paz en Colombia al igual que sus respectivas falencias. De tal manera, una comprensión más asertiva de este fenómeno permitiría que las personas que lideren este tipo de procesos en un futuro generen de manera consciente incentivos sólidos que afiancen la confianza y disminuyan las asimetrías de información entre las partes negociadoras.

De todo lo anterior, se puede concluir que para este caso de estudio los problemas de compromiso tuvieron una incidencia mayor en la negociación que las asimetrías de información debido pues a pesar de que hubo una diferencia entre ambos actores respecto

a la voluntad efectiva de negociación de su contraparte, no fue lo suficientemente significativa como para que se creara una asimetría de información. Además, vale la pena recordar que la información respecto a la capacidad armamentística es un componente importante para el concepto de asimetrías de información, y en este caso particular no se evidenció el uso de este tipo de información durante el proceso.

Por otro lado, uno de los resultados más significativos de esta investigación fue la incidencia que tuvo el Ejército Nacional en el problema de compromiso que surgió entorno al presidente Betancur, la diferencia de ambos actores respecto al manejo que debía dársele al M-19 impidió que el expresidente pudiera asegurar el cumplimiento de los términos del acuerdo particularmente respecto a la seguridad de los militantes del grupo armado, pues el Ejército tomó la decisión de actuar de manera independiente y atacar en diferentes ocasiones a los líderes del “Eme” y los campamentos donde se encontraban, lo cual obligó al M-19 a desertar del proceso.

Como se ha dicho reiteradamente, para este caso de estudio no hubo mayor incidencia de las asimetrías de información en el rompimiento de los acuerdos de Corinto debido a las particularidades del proceso mismo y la disponibilidad de informaciones que tienen ambos actores respecto a sus respectivas capacidades militares. Sin embargo, se considera que podría ser interesante que la academia emplee este referente teórico para analizar otras negociaciones de paz a nivel nacional, pues las diferentes circunstancias y particularidades de otros casos de estudio podrían haber generado asimetrías de información entre las partes que quizás incidieron significativamente en los desenlaces que tuvieron esas negociaciones. Así mismo, los resultados del estudio buscan invitar a otros investigadores a emplear las bases teóricas de los problemas de compromiso para comprender por qué fallan las negociaciones de paz en el marco del conflicto interno colombiano pues el comportamiento de ambos actores y la voluntad de mostrar compromiso para mantener los términos de los acuerdos en un futuro puede incidir significativamente en el desenlace que tienen este tipo de procesos.

Para este trabajo queda pendiente emplear otras herramientas de recolección de información para un análisis mucho más robusto. En un principio se consideró emplear documentos del CEDEMA que ofrecieran informaciones complementarias desde las experiencias del M-19 durante el proceso pero la información disponible no fue suficiente para presentar un análisis enriquecedor que complementara los resultados de las encuestas y las entrevistas. Además, vale la pena mencionar que para estudiar algunos aspectos propios de las asimetrías de información hay información clasificada respecto a

inteligencia militar y capacidad armamentística del Ejército a la cual no pude tener acceso debido a los alcances de este tipo de trabajo y el contexto de la pandemia en el que se hizo. Finalmente, se compromete a continuar estudiando procesos de negociación en el país a la luz de ambos referentes teóricos con el fin de contribuir teórica y prácticamente a la paz de Colombia.

Bibliografía:

- Fearon, J. (1995). Rationalist explanations for war. *International Organizations*, 49 (3) 319-414.
- Sambanis, N. (2004). What Is Civil War? Conceptual and Empirical Complexities of an Operational Definition. *Journal of conflict resolution*, 48(6), 814-858. DOI: 10.1177/0022002704269355
- Walter, B. (2009). Bargaining Failures and Civil War. *The Annual Review of Political Science*, 12, 243-270. doi: 10.1146/annurev.polisci.10.101405.135301.
- Kirschner, S.A. (2010). Knowing Your Enemy: Information and Commitment Problems in Civil Wars. *Journal of conflict resolution* 54(5), 745-770. DOI: 10.1177/0022002710372753.
- Thomson, A. (2020). The credible commitment problem and multiple armed groups: FARC perceptions of insecurity during disarmament in the Colombian peace process. *Conflict, Security and Development*. DOI: 10.1080/14678802.2020.1794139
- Padilla, M. J. (2017). Los embates por la paz: historia de los diálogos de paz durante el gobierno de Belisario Betancur con los grupos guerrilleros, Colombia. *Forum*, 10 (11), 85-104.
- Comisión de la Verdad. (2010). *Informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia*. Recuperado de: <https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8792>
- Yaffe, Lilian (2011). Conflicto armado en Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta. *Revista CS*, (8), 187-208
- León. P. C. (2012). El espectacular lanzamiento de la guerrilla urbana en Colombia, el M-19 en 1974. *Historias*, (83), 103-116.
- Gutiérrez, A. (2012). Negociaciones de paz en Colombia, 1982-2009. Un estado del arte. *Estudios Políticos*, (40), 175-200.

- Hernández, E. (2016). Negociaciones de paz en Colombia: una mirada de perspectiva de construcción de paz. *Papel Político*, 21(1), 35-56. DOI: <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.papo21-1.npcm>
- Jaramillo, J. (2007). *La espada de Bolívar*. Fondo Editorial ITM.
- Urán, H. (2020). *Mi vida y el Palacio – 6 y 7 de noviembre de 1985*. Editorial Planeta Colombiana.
- Lora, P. (2007). Estatuto de seguridad nacional: derechos humanos y subversión. *POLISEMIA*, 3(3), 12-30. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.polisemia.3.3.2007.12-30>
- Paredes, Z y Diaz, N. (2007). Los orígenes del Frente Nacional en Colombia. *Presente y pasado*, 12(23). 179-190.
- Redacción El Tiempo. (2010). Turbay dicta polémico estatuto de seguridad. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4169210>
- Patiño, O., Grave, V. y García, M. (2009). El camino del M-19 de la lucha armada a la democracia: una búsqueda de cómo hacer política en sintonía con el país. En García, M. (Ed), *De la insurgencia a la democracia. Estudios de caso*. (pp. 43-107). CINEP.
- Parada, P, J. (2012) El proceso político colombiano durante el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982). *Eleuthera*, 7. 135-166.
- López, J, C. (2017). La década del terror (los años ochenta). *El Eafitense*. <https://www.eafit.edu.co/medios/eleafitense/105/Paginas/la-decada-del-terror.aspx>
- Mattes, M y Savun, B. (2009). Fostering Peace After Civil War: Commitment Problems and Agreement Design. *International Studies Quarterly*, 53(3). 737-759
- Forero, J. (2018). La paz de Belisario: una esperanza presa de la confrontación política. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/procesos-de-paz-que-lidero-belisario-betancur-expresidente-de-colombia-302436>